

1.1. EL DERECHO AMBIENTAL EN CATALUÑA (pp. 2-34)

—

1.1. EL DRET AMBIENTAL A CATALUNYA (pp. 35-66)

LUCÍA CASADO CASADO

*Profesora agregada de Derecho Administrativo / Professora agregada de Dret
Administratiu*

Universitat Rovira i Virgili

—
Investigadora

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona)

Sumario. 1. Derecho estatal de aplicación en Cataluña. 1.1. La modificación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 1.2. Algunas novedades de tipo organizativo: la modificación de la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 1.3. Las novedades en materia de aguas. A. La transposición de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. B. La modificación del Reglamento de la Planificación Hidrológica para evitar demoras adicionales en el proceso de planificación en curso. 1.4. La aprobación del primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible. 1.5. La ratificación del Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica al Convenio sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo. 1.6. Otras normas de interés. 2. Derecho y políticas ambientales autonómicas. 2.1. Las políticas ambientales en Cataluña: estrategias y programas. A. La Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Cataluña. B. Los programas de gestión de residuos municipales, residuos industriales y residuos de la construcción. C. El Programa de Actuaciones para la Gestión de los Lodos Generados en los Procesos de Depuración de Aguas Residuales Urbanas. 2.2. Dos propuestas legislativas de interés. A. El anteproyecto de Ley de la Biodiversidad y el Patrimonio Natural. B. El anteproyecto de Ley de la Contaminación Odorífera: un intento pionero de regulación específica de la contaminación por olores a través de una norma de rango legal. 2.3. La normativa ambiental: aspectos más destacables. A. La entrada en vigor de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades. B. La problemática en torno a las corridas de toros y las fiestas tradicionales con toros. C. La normativa en materia de espacios naturales protegidos. D. Algunas novedades en la legislación de residuos. E. Otras normas de interés.

1. Derecho estatal de aplicación en Cataluña

La actividad normativa desarrollada por el Estado en materia de protección del medio ambiente durante el período objeto de análisis se ha realizado fundamentalmente a través de normas reglamentarias. Únicamente ha visto la luz en este período una norma de rango legal, si bien no se trata propiamente de la elaboración de una nueva ley, sino de la modificación de una ya existente. Nos referimos a la Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo. Además de esta ley, también deben destacarse especialmente algunas normas reglamentarias de interés, como las que proceden a la reestructuración del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a la regulación de la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, a la modificación del Reglamento de la Planificación Hidrológica y a la aprobación del primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible; así como la ratificación del Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica al Convenio sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Kiev el 21 de mayo de 2003.

1.1. La modificación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

El régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero ha sido objeto de importantes modificaciones de la mano de la Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo. La aprobación de esta ley era del todo necesaria para adaptar la legislación española al nuevo marco jurídico comunitario en este ámbito. Efectivamente, la aprobación de dos directivas que revisan la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003 (las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2008/101/CE, de 19 de noviembre de 2008, que incluye las emisiones derivadas de las actividades del sector de la aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión, y 2009/29/CE, de 23 de abril, que acomete una revisión en profundidad de este régimen comunitario con el fin de armonizar el régimen de derechos de comercio de emisión para aprovechar mejor sus beneficios potenciales, evitar distorsiones en el mercado comunitario interior, facilitar vínculos entre regímenes de comercio de derechos de emisión, incrementar la previsibilidad y ampliar el ámbito de aplicación del régimen para dar cabida a nuevos sectores y gases que cumplen las condiciones necesarias para ser regulados mediante un instrumento normativo de este tipo) exigía la modificación de la Ley 1/2005.

La Ley 13/2010 cuenta con un único artículo que, a través de diversos apartados, va modificando diversos preceptos de la Ley 1/2005, y se completa con una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Sus disposiciones son de carácter marcadamente ambiental, tanto por su objetivo —contribuir a la reducción de las emisiones de efecto invernadero— como por su origen —los compromisos asumidos con arreglo al Protocolo de Kioto y las directivas comunitarias—. Por ello, buena parte de sus disposiciones se adoptan en el marco del artículo 149.1.23 de la Constitución (así, las relativas a las autorizaciones de emisión, y a las obligaciones de seguimiento de las emisiones, de remisión de información y de verificación), sin perjuicio de que se invoque también el artículo 149.1.13, en materia de

bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (para las modificaciones del mercado de derechos de emisión).

Son muchas las novedades que introduce esta ley, aunque algunas no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2012 o el 1 de enero de 2013¹. Dado el volumen de modificaciones incorporadas, solo vamos a destacar algunas de las más importantes. Entre ellas, en primer lugar, la inclusión del sector de la aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión, lo que hace necesario introducir las correspondientes actualizaciones, modificaciones y adaptaciones en diferentes preceptos de la Ley 1/2005. Existen, además, otros cambios en cuanto al ámbito de aplicación, habida cuenta de que se incluyen sectores industriales nuevos en el anexo 1 (como la producción de aluminio, cobre, zinc y metales no férreos en general, el secado y calcinado de yeso, la producción de ácido nítrico...) y aparecen gases distintos del CO₂, como los perfluorocarburos en la producción de aluminio, y el óxido nitroso en la fabricación de algunos productos en la industria química.

En segundo lugar, la Ley introduce algunas novedades en el régimen de autorizaciones de emisión de gases de efectos invernadero, como son la necesidad de revisar las autorizaciones al menos cada cinco años y la integración del plan de seguimiento en la autorización y el establecimiento de obligaciones sobre el uso de sistemas automatizados y formatos de intercambio de datos.

En tercer lugar, a partir del 1 de enero de 2013, desaparece el Plan Nacional de Asignación, que ha sido el elemento central en la asignación de derechos de emisión durante los dos primeros períodos de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión. A partir de esta fecha se adopta un enfoque comunitario, tanto en lo que respecta a la determinación del volumen total de derechos de emisión, como en lo relativo a la metodología para asignar los derechos de emisión. De este modo, la cantidad de derechos de emisión se determina a escala comunitaria, correspondiendo el cálculo y la publicación de dicha cantidad a la Comisión Europea, con arreglo a lo establecido en la Directiva 2009/29/CE. En este nuevo régimen se prevén dos fórmulas básicas a través de las cuales se asignarán los derechos de emisión: la subasta de

¹ *Vid.* la disposición final segunda.

derechos de emisión, que adquiere un papel central como método de asignación, y la asignación gratuita transitoria.

En cuarto lugar, se introduce como novedad el concepto de período de comercio, que sustituye lo que en el régimen actual es el período de vigencia de un plan nacional de asignación. Los derechos de emisión solo son válidos para un período de comercio dado, pero, una vez finalizado el período, los haberes de los titulares de cuenta deben intercambiarse por derechos correspondientes al siguiente período. En este sentido, como establece el preámbulo de la Ley, “se dice que los derechos son arrastrables entre períodos”. La duración de los períodos de comercio se fija en ocho años.

En quinto lugar, también hay cambios importantes en el funcionamiento del registro de derechos de emisión (a partir del 1 de enero de 2012 los derechos de emisión deben estar consignados en el registro comunitario único, por lo que los registros nacionales de derechos de emisión dejan de desempeñar un papel en la gestión del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión) y en el régimen sancionador (provienen fundamentalmente de la inclusión del sector de la aviación).

Por último, también se regulan todos los aspectos específicos del funcionamiento del régimen de comercio de derechos de emisión para la aviación que difieren del funcionamiento del régimen general (por ejemplo, en este sector no se precisa disponer de un régimen de autorización de emisión de gases de efecto invernadero y, en su lugar, las medidas para el seguimiento y la notificación se establecen en planes de seguimiento).

1.2. Algunas novedades de tipo organizativo: la modificación de la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Desde el punto de vista organizativo, debe destacarse la modificación de la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, efectuada inicialmente a través del Real Decreto 1227/2010, de 1 de octubre, y recogida posteriormente en el Real Decreto 1443/2010, de 5 de noviembre, así como el cambio de la titular del Ministerio (Elena Espinosa ha sido sustituida por Rosa Aguilar).

Con relación a la estructura orgánica básica del Ministerio, inicialmente, el Real Decreto 1227/2010 ha modificado el Real Decreto 1130/2008, de 4 de julio, con arreglo al Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales, con la finalidad de conseguir la máxima eficacia y racionalidad en la acción de la Administración. Tres son las principales modificaciones que, de conformidad con las directrices de austeridad dictadas por el Gobierno, introduce esta norma en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En primer lugar, procede a la reducción de dos subdirecciones generales (se suprime la Subdirección General de Políticas Agroalimentarias, Desarrollo Rural y Agua y se elimina la previsión de que el presidente del Consejo Superior Agrario tendrá categoría de subdirector general). En segundo lugar, introduce diferentes modificaciones en la estructura de la Secretaría General del Mar para delimitar con mayor precisión las funciones que se atribuyen a cada una de las direcciones generales que la integran y adaptarlas a los cambios producidos en el entorno administrativo y legislativo. Como se pone de manifiesto en el preámbulo de este real decreto, “los cambios introducidos están vinculados al ejercicio de las competencias que atribuye a los Estados miembros la Directiva 2008/56/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino, conocida como la Directiva marco sobre la estrategia marina. Asimismo, también se recogen como novedad las funciones que corresponden a la Secretaría General del Mar en relación con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca IUU), como consecuencia del sistema comunitario implantado por el Reglamento (CE) núm. 1005/2008, del Consejo, de 29 de septiembre de 2008”. El resto de los cambios “responden a la necesidad de delimitar mejor las funciones que corresponden a la Secretaría General del Mar, en aras de una mayor transparencia y racionalidad, realizando algunos cambios en la denominación de sus Subdirecciones Generales para adecuarlas a los ajustes hechos en las funciones que habrán de ejercer”. En tercer lugar, prevé, de conformidad con el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y según la interpretación jurisprudencial de este precepto, la excepción a la reserva funcionarial en el nombramiento de los titulares de la Dirección General del Agua y de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, para un mejor ejercicio de

sus funciones y en atención a las características que concurren en estas. De este modo se permite que el nombramiento de los titulares de estas direcciones generales pueda realizarse a favor de personas que desempeñen o hayan desempeñado los cargos o puestos de trabajo relacionados en la disposición adicional tercera, en su nueva redacción, en consideración a su cualificación profesional y experiencia en los respectivos ámbitos. Como advierte el preámbulo: “Se trata en definitiva de poder aprovechar la cualificación y experiencia de personas que han sido seleccionadas con arreglo a los principios de mérito y capacidad y han desarrollado su carrera profesional en el sector público, habiendo adquirido experiencia en instituciones comunitarias, o en las distintas formas organizativas (agencias, entidades públicas, sociedades estatales...) que el legislador ha ido diseñando para la gestión de políticas públicas en los últimos años”.

Posteriormente, tras la reestructuración de departamentos ministeriales efectuada por el Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, y tras la aprobación del Real Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, se ha adoptado el Real Decreto 1443/2010, de 5 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y se deroga el Real Decreto 1130/2008, modificado por el Real Decreto 1227/2010. Tras estas modificaciones normativas, a este ministerio continúa correspondiendo la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático; protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar; agua; desarrollo rural; recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros; y alimentación. No se ha visto, por lo tanto, alterada la configuración de las políticas propias del referido departamento ministerial tras esta reestructuración, que se mantiene en torno a dos secretarías de Estado —la Secretaría de Estado de Cambio Climático² y la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua³— y la

² De la Secretaría de Estado de Cambio Climático dependen los siguientes órganos directivos: la Oficina Española del Cambio Climático, con rango de dirección general; la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental; la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal; y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

³ De la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua dependen los siguientes órganos directivos: la Secretaría General de Medio Rural, con rango de subsecretaría, de la que dependen las direcciones generales de Recursos Agrícolas y Ganaderos, Desarrollo Sostenible y Medio Rural e Industria y Mercados Alimentarios; y la Dirección General del Agua.

Subsecretaría⁴ y la Secretaría General del Mar⁵. Ello no obstante, como consecuencia del Real Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en aras de una mayor racionalización y equilibrio interno se aborda una reordenación de las funciones y competencias entre órganos superiores y directivos. En la Secretaría de Estado de Cambio Climático pasan a integrarse la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, antes adscrita a la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, antes adscrita a la Secretaría General del Mar. De esta forma, la Secretaría de Estado de Cambio Climático concentra las políticas del departamento más directamente relacionadas con la protección del medio ambiente. Por su parte, la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua asume las políticas del Ministerio referentes a la definición de los objetivos y programas derivados de la Directiva Marco del Agua, la gestión directa del dominio público hidráulico, la Política Agrícola Común, las políticas agroalimentarias y el desarrollo sostenible del medio rural y del territorio. Se mantiene, asimismo, la excepción a la reserva funcionarial en el nombramiento de los titulares de la Dirección General del Agua y de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

En el ámbito organizativo, también debe mencionarse el Real Decreto 718/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 795/1989, de 23 de junio, por el que se regula la organización y funcionamiento del Instituto de Astrofísica de Canarias; el Estatuto del Instituto Español de Oceanografía, aprobado por Real Decreto 1950/2000, de 1 de diciembre; el Estatuto del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, aprobado por Real Decreto 1951/2000, de 1 de diciembre; el Estatuto del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, aprobado por Real Decreto 1952/2000, de 1 de diciembre; el Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España, aprobado por Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre; y el Estatuto de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aprobado por el Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre. Y la Orden

⁴ De la Subsecretaría dependen los siguientes órganos directivos: la Secretaría General Técnica y la Dirección General de Servicios.

⁵ De la Secretaría General del Mar dependen los siguientes órganos directivos: la Dirección General de Ordenación Pesquera y la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura.

ARM/2616/2010, de 5 de octubre, por la que se establece la composición y funcionamiento del Comité de Participación en el marco del Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente.

1.3. Las novedades en materia de aguas

En materia de aguas, han visto la luz dos normas de interés. Por una parte, el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2007/60/CE, de 23 de octubre de 2007. Por otra, el Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, que modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.

A. La transposición de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación

A través del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio⁶, se ha incorporado al ordenamiento jurídico español la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, que introduce criterios para la gestión de este tipo de riesgos que deben ser aplicados por los países miembros de la Unión Europea. Se completa así el marco jurídico regulador español en esta materia, constituido por el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, modificada por la Ley 11/2005, de 22 de junio; la normativa de protección civil (en particular, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994, en el marco de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, y la Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto

⁶ Este real decreto tiene carácter de legislación básica al dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1.13 y 23 de la Constitución para dictar las bases de la actividad económica y de protección del medio ambiente, respectivamente, salvo los artículos 14, 15, 19 y 21, que se dictan en base a la competencia exclusiva que corresponde al Estado en materia de seguridad pública, conforme al artículo 149.1.29 de la Constitución; y el artículo 20, que se dicta en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.3 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales.

407/1992, de 24 de abril); la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba su reglamento general de desarrollo y ejecución; el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo; y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (modificado recientemente en este punto por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, que, aunque no transpone la Directiva 2007/60/CE, incorpora los criterios que dicha Directiva establece en lo que se refiere a las zonas inundables).

El objeto de este real decreto, que consta de seis capítulos, veintidós artículos y un anexo, es regular los procedimientos para realizar la evaluación preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y riesgo y los planes de gestión de los riesgos de inundación en todo el territorio español. Los principales objetivos son obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos asociados a las inundaciones y lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones. Se da cumplimiento, de este modo, al mandato de la Directiva de reducir las consecuencias negativas, asociadas a las inundaciones, para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras.

Con estos objetivos, se aplica a las inundaciones ocasionadas por desbordamiento de ríos, torrentes de montaña y demás corrientes de agua continuas o intermitentes, así como a las inundaciones causadas por el mar en las zonas costeras y las producidas por la acción conjunta de ríos y mar en las zonas de transición. Y se introducen una serie de instrumentos para hacer efectiva la prevención y protección contra los riesgos de inundación que se concretan en la evaluación preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y de riesgo y los planes de gestión del riesgo de inundación. También se recogen algunas disposiciones complementarias de coordinación sectorial, participación pública y coordinación entre las distintas administraciones públicas, necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.

Como se recoge en el preámbulo, los beneficios de la aplicación de este real decreto derivarán de un doble efecto: "Por una parte la introducción de las nuevas herramientas de gestión agilizará la implantación de los mecanismos de protección de los cauces y de

las zonas inundables, lo que redundará en evitar o disminuir los daños ambientales y sobre los bienes y personas que se protegen. Por otra parte, el conjunto de disposiciones introducidas en el Real Decreto permiten responder de modo más eficaz ante las fuertes presiones de ocupación que sufren las zonas limítrofes con los cauces, lo que redundará en una disminución de los daños derivados de las inundaciones por avenidas”.

B. La modificación del Reglamento de la Planificación Hidrológica para evitar demoras adicionales en el proceso de planificación en curso

A través del Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, se ha modificado de forma puntual el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, con el fin de dar una solución transitoria a una problemática concreta planteada en el proceso de elaboración de los nuevos planes hidrológicos. El problema estriba en la falta de la efectiva constitución de los consejos del agua de la demarcación, lo cual supone un obstáculo importante en el proceso de planificación hidrológica en curso, dado que estos órganos colegiados, configurados como órganos de participación y planificación, participan en la elaboración de determinados documentos del proceso planificador. Para hacer frente a esta situación y, como señala el preámbulo del Real Decreto 1161/2010, dada “la necesidad de evitar demoras adicionales en el proceso de planificación en curso y la superación de los apercibimientos recibidos oficialmente desde la Comisión Europea”, se ha optado por una solución transitoria, “de carácter totalmente excepcional y prevista exclusivamente para superar la presente situación”, y así evitar que el proceso de planificación hidrológica iniciado se retrase más debido a la falta de la efectiva constitución de los consejos del agua en todas o algunas de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias. La solución propuesta, efectuada mediante la introducción de una disposición transitoria en el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, consiste en prever que, en caso de no estar todavía constituidos los consejos del agua de las demarcaciones correspondientes, el informe sobre el esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de las aguas —conforme a lo previsto en el artículo 79.6 del Reglamento de la Planificación Hidrológica— sea emitido por los actuales consejos del agua de la cuenca o, en su defecto, por la Junta de Gobierno del organismo de cuenca,

requiriéndose la conformidad del Comité de Autoridades Competentes. Este requisito de conformidad de este comité se justifica por el hecho de que en los actuales consejos del agua de la cuenca no existe ni representación municipal ni de las autoridades competentes en aguas costeras y de transición. Además, el correspondiente informe se completará con las alegaciones recibidas en el proceso de consulta pública.

1.4. La aprobación del primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible

El Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, ha aprobado el primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible para el período 2010-2014. Este programa constituye el principal instrumento de aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, y se ha dictado al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Como pone de manifiesto el preámbulo de este real decreto, “el Programa es el instrumento principal para la planificación de la acción de la Administración General del Estado en relación con el medio rural, por lo que, sin perjuicio de que se incluyan en el mismo medidas específicas que encuentren amparo en otros títulos competenciales, las actuaciones comprendidas en el Programa deben entenderse como una unidad que responde a criterios y objetivos encuadrados en la planificación general de la actividad económica”.

Este programa se aprueba, pues, con el fin de concretar las medidas de política rural, así como los procedimientos y los medios para llevarlas a cabo, todos ellos relacionados con los objetivos de la Ley 45/2007, como son la mejora de la situación socioeconómica y la calidad de vida de las poblaciones de las zonas rurales en el marco del respeto ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales. El Programa se aplicará en las zonas rurales, delimitadas y calificadas por las comunidades autónomas, que se incorporan en el capítulo 3 de este real decreto, y, en concordancia con lo previsto en la Ley 45/2007, abarcará un período de cinco años (2010-2014). Su elaboración se ha realizado en colaboración con las comunidades autónomas e incluye tanto los objetivos, los planes y las actuaciones sectoriales a desarrollar por la Administración General del Estado, como los concertados con las administraciones de las comunidades autónomas.

Asimismo, con la aprobación de este programa se pone en marcha el proceso de elaboración de los planes de zona rural que concretarán e incluirán las actuaciones y medidas necesarias para alcanzar los objetivos económicos, sociales y ambientales en el marco de la sostenibilidad, durante el período de duración del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, y de acuerdo con sus determinaciones.

1.5. La ratificación del Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica al Convenio sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo

Desde una perspectiva internacional, debe destacarse la ratificación por España del Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica al Convenio sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Kiev el 21 de mayo de 2003, mediante Instrumento de Ratificación de 24 de junio de 2009⁷. Su objeto es establecer un alto nivel de protección del medio ambiente, incluida la salud, garantizando que en el desarrollo de planes y programas se tengan en cuenta de forma exhaustiva las consideraciones relativas al medio ambiente, incluida la salud; contribuyendo a la consideración de las cuestiones relativas al medio ambiente, incluida la salud, en la elaboración de las políticas y la legislación; estableciendo procedimientos de evaluación estratégica nítidos, transparentes y eficaces; garantizando la participación del público en la evaluación ambiental estratégica; e integrando, por estos medios, las preocupaciones en materia de medio ambiente, incluida la salud, en las medidas y los instrumentos dirigidos a promover el desarrollo sostenible. Este protocolo entrará en vigor de forma general y para España el 11 de julio de 2010, de conformidad con lo establecido en su artículo 24.

1.6. Otras normas de interés

Además de la normativa destacada, se han aprobado en este período varias normas reglamentarias —reales decretos y órdenes ministeriales—, tanto en materias ambientales como en sectores directa o indirectamente relacionados con el medio ambiente. Dado el objetivo de esta crónica, no pueden enumerarse todas ellas, aunque sí

⁷ Publicado en el BOE núm. 162, de 5 de julio.

destacamos algunas aprobadas en materia de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, de modificación del Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio), de residuos (Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos), de sustancias y mezclas (Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos; y Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, que incorpora al derecho español la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, que modifica las directivas 76/768/CEE, 88/378/CEE y 1999/13/CE del Consejo y las directivas 2000/53/CE, 2002/96/CE y 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo para adaptarlas al Reglamento CE 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, en lo que se refiere a las directivas del área medioambiental⁸: Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones —incorporada a través del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades—; y las directivas 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil —incorporada a través del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil—; 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos —incorporada mediante el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus

⁸ Este reglamento implicará, a partir del 1 de junio de 2015, la completa derogación de las dos directivas comunitarias que regulaban esta materia: la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas, y la Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 1999, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos.

residuos—; y 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los productos de renovación del acabado de vehículos —incorporada a través del Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices en productos de renovación del acabado de vehículos—) y de protección civil (Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico).

2. Derecho y políticas ambientales autonómicas

El derecho y la política ambientales catalanes en el período objeto de análisis (mayo-noviembre del 2010) han venido marcados por la proximidad del final de la legislatura, dada la inminente celebración de elecciones autonómicas el próximo 28 de noviembre. En este período, a nivel de estrategias y programas, han visto la luz algunos documentos de gran interés, entre los cuales destaca especialmente la aprobación de la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Cataluña, que, con el punto de mira puesto en el año 2026, establece ejes, líneas estratégicas y objetivos estratégicos para conseguir una Cataluña sostenible en el horizonte fijado. Asimismo, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda ha tomado la iniciativa en la elaboración de dos anteproyectos de ley, en materia de biodiversidad y calidad odorífera, que aspiraban a introducir una novedosa regulación en estos ámbitos, aunque por razones temporales no han podido ser aprobados como leyes en esta legislatura. Por otra parte, a nivel normativo, debe destacarse la entrada en vigor del nuevo régimen de prevención y control ambiental de las actividades, introducido por la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, aun sin haberse aprobado todavía los reglamentos de desarrollo de esta ley; la modificación del texto refundido de la Ley de Protección de los Animales para introducir la prohibición de las corridas de toros, y la regulación, a través de una ley específica, de las fiestas tradicionales con toros; la declaración de nuevos espacios naturales de protección especial y la aprobación de algunos planes especiales de protección del medio natural y del paisaje; y algunas normas en materia de residuos.

2.1. Las políticas ambientales en Cataluña: estrategias y programas

Durante el período examinado se han aprobado en Cataluña la Estrategia para el Desarrollo Sostenible, así como varios programas en materia de gestión de residuos y lodos de depuradora.

A. La Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Cataluña

El Gobierno catalán, mediante el Acuerdo GOV/127/2010, de 31 de agosto⁹, ha aprobado —a propuesta del consejero de Medio Ambiente y Vivienda— la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Cataluña¹⁰, con el fin de impulsar una estrategia a nivel autonómico que incorpore el concepto de desarrollo sostenible, que garantice la integración de esta noción en el conjunto de políticas sectoriales y en los instrumentos (tanto legislativos como de planificación, gestión y administración) vigentes y futuros como oportunidad para hacer frente a los retos de futuro, y que sirva, en definitiva, como instrumento para integrar, coordinar y elevar a escala autonómica una política de desarrollo sostenible transversal y holística.

Esta estrategia, que fija como horizonte el 2026, debe convertirse en la hoja de ruta que establezca las líneas y los objetivos estratégicos clave para garantizar la transición de Cataluña hacia una economía segura, ecoeficiente y de bajo contenido en carbono, basada en una minimización del consumo de recursos, especialmente de los no renovables, y de los impactos sobre la salud y el medio en Cataluña y en el mundo, y que armonice el desarrollo económico con la mejora del bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía; internalice los costes ambientales y el valor de los servicios de los ecosistemas y de la biodiversidad; asegure la restauración de los efectos ocasionados por los impactos ambientales y la recuperación del capital natural y su funcionalidad; alcance una verdadera integración horizontal y vertical entre las diferentes políticas sectoriales y entre los diferentes niveles de gobierno, respectivamente, garantizando la

⁹ Vid. DOGC núm. 5710, de 8 de septiembre de 2010.

¹⁰ Puede consultarse el contenido de esta estrategia en el siguiente enlace: http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/edscat/graf/final.pdf

coherencia entre los diversos objetivos sectoriales; garantice la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones; y logre una sociedad culta, inclusiva, con igualdad de oportunidades y solidaria.

Esta estrategia presenta como elemento innovador la concreción y cuantificación de los objetivos estratégicos de la Cataluña sostenible del 2026. La Estrategia se vertebría en siete ejes para presentar el modelo sostenible de la Cataluña del año 2026 (Cataluña, un territorio biodiverso con ciudades y pueblos; Cataluña, eficiente en el uso de la energía y en la acción climática; Cataluña se mueve con inteligencia; Cataluña ecoeficiente, competitiva e innovadora; Cataluña consume con criterio; Cataluña cívica, inclusiva, solidaria, sana y segura; y Cataluña participativa y con una administración próxima) y 16 líneas estratégicas que se identifican como pautas esenciales para garantizar la transición eficaz desde la situación actual hasta el modelo sostenible planteado (matriz territorial diversa y funcional, eficiente en el uso del suelo; regeneración y rehabilitación urbana; gestión integral del patrimonio natural y conservación de la biodiversidad; actividad agraria, forestal y pesquera sostenible; más calidad de vida con menos energía; impulso a las fuentes de energía renovables y a la gestión inteligente en red; transporte sostenible competitivo; gestión inteligente de las infraestructuras y electrificación del transporte; internalización económica de externalidades socioambientales; ecoeficiencia e innovación de los procesos productivos y desarrollo de servicios ambientales y sociales; consumo racional y calidad de vida; comercialización y compra sostenibles; cohesión social; más calidad ambiental para más salud; educación para el conocimiento y capacitación para la sostenibilidad; para una gobernanza más eficiente y participativa). La concreción de cada línea estratégica se garantiza mediante objetivos estratégicos que definen con precisión unos escenarios de sostenibilidad caracterizados por un elevado grado de ambición y con garantías de viabilidad. Se establecen 101 objetivos estratégicos —49 de ellos cuantificados—, para garantizar, a nivel operativo, la concreción y la viabilidad del modelo 2026. Estos objetivos estratégicos han sido consensuados por los diferentes departamentos de la Generalitat y con un conjunto de actores sociales y económicos, con el fin de garantizar el carácter integrado de la Estrategia con el resto de planes y programas de la Generalitat.

Para posibilitar el pleno cumplimiento de la Estrategia, también se prevé que será necesario promover la elaboración de un amplio abanico de instrumentos para avanzar hacia la consecución de los objetivos estratégicos fijados, y, aunque se prevé su concreción en el momento de elaborar el Plan de Acción de la Estrategia, se agrupan estos instrumentos, necesariamente interrelacionados, en seis categorías: de planificación; de gestión; económicos, fiscales y financieros; legislativos; sociales; y de coordinación interadministrativa.

El desarrollo de esta estrategia se llevará a cabo a través de planes de acción departamentales que concretarán los instrumentos y las medidas prioritarias para alcanzar los objetivos de la Estrategia y que se integrarán en el Plan Marco de Seguimiento y Coordinación de la Estrategia. Además de estos planes, también se prevén planes de acción sobre temáticas específicas que concreten las actuaciones prioritarias a realizar sobre alguna temática o sector específico que tenga una especial repercusión en la consecución de los objetivos de la Estrategia; y el desarrollo de criterios para la integración de los objetivos y las líneas estratégicas en los planes, programas y textos legislativos que elaboren el Gobierno y los diferentes departamentos de la Generalitat. Esta integración garantizará, junto con los planes de acción departamentales, la implantación efectiva de la Estrategia.

El seguimiento específico de la Estrategia, así como la gestión técnica y el impulso de su desarrollo, lo realizará el departamento competente en materia de medio ambiente. También se prevé la evaluación de la Estrategia mediante la elaboración de un informe bienal para realizar un balance de los progresos alcanzados en la consecución de los objetivos estratégicos, llevar a cabo un análisis prospectivo de nuevas necesidades y detectar prioridades emergentes.

B. Los programas de gestión de residuos municipales, residuos industriales y residuos de la construcción

En junio del 2010 se aprobaron en Cataluña tres programas específicos para la gestión de residuos: el Programa de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña

(PROGREMIC), el Programa de Gestión de Residuos Industriales de Cataluña (PROGRIC) y el Programa de Gestión de Residuos de la Construcción (PROGROC)¹¹.

El PROGREMIC determina con carácter programático la planificación del Gobierno de la Generalitat para la gestión de los residuos municipales producidos en el ámbito territorial de Cataluña y tiene naturaleza jurídica de plan sectorial de coordinación, de acuerdo con el artículo 148 del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, mediante el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña. Este nuevo programa de gestión de residuos municipales establece los objetivos en relación con la gestión de residuos municipales a alcanzar en el 2012 (prevención en origen: reducción respecto al 2006 de un 10% en la generación de residuos municipales per cápita; valorización material: 48% de valorización material total de los residuos municipales generados; y reducción del desperdicio destinado a disposición final: disminución progresiva de residuos sin tratar destinados a incineración o depósito controlado hasta alcanzar un 100% de tratamiento y disposición de un 41% de desperdicio respecto a la generación total de residuos). También determina que las prioridades de las actuaciones necesarias para la gestión de los residuos municipales en Cataluña se fundamentan en los siguientes ejes: jerarquía de gestión y jerarquía de actuación, que establece la jerarquía en las acciones a realizar en los tres ámbitos de actuación del Programa (la ciudadanía, las organizaciones y las infraestructuras). Asimismo, prevé las obligaciones de los entes locales respecto al desarrollo de mecanismos para alcanzar los objetivos establecidos en el Programa, el tratamiento de la fracción resto en las infraestructuras de gestión de residuos municipales y el suministro de información sobre gestión de residuos municipales; y crea un órgano de coordinación de las actuaciones de gestión de residuos municipales en el ámbito general de Cataluña y en relación con cada una de las instalaciones del Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales.

El PROGRIC determina con carácter programático la planificación del Gobierno de la Generalitat para la gestión de los residuos industriales en el ámbito territorial de

¹¹ Estos programas se aprueban, respectivamente, a través de los decretos 87/2010, 88/2010 y 89/2010, todos de 29 de junio.

Cataluña. Este programa establece para el año 2012 el objetivo de valorización del 82% de los residuos generados en el sector productivo de las actividades.

El PROGROC planifica la gestión de los residuos de la construcción y demolición producidos o gestionados en el ámbito territorial de Cataluña, y establece objetivos cuantitativos a alcanzar en el 2012. Estos objetivos son los siguientes: recogida y gestión controladas de residuos de la construcción y demolición: 100%; reducción de la generación de residuos de la construcción y demolición: 10%; reciclado de residuos de la construcción y demolición: 50%; valorización de residuos de envases de materiales de construcción: 70%; y recogida selectiva y correcta gestión de residuos peligrosos: 100%.

En cuanto al seguimiento y la evaluación de las actuaciones previstas en estos tres programas, corresponde a la Agencia de Residuos de Cataluña, debiendo ser objeto los programas de un seguimiento y una evaluación bienales, de acuerdo con los principios de participación pública y transparencia. Deben ser revisados como máximo en seis años, correspondiendo la realización de esta revisión y modificación a la Agencia de Residuos por lo que respecta a su elaboración y propuesta, y al Gobierno de la Generalitat por lo que respecta a su aprobación. Por último, debe destacarse que las actuaciones previstas en los programas se financian por la Agencia de Residuos de Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los contratos programa suscritos o a suscribir entre la Agencia y el Gobierno.

C. El Programa de Actuaciones para la Gestión de los Lodos Generados en los Procesos de Depuración de Aguas Residuales Urbanas

Mediante el Acuerdo GOV/165/2010, de 21 de septiembre¹², el Gobierno catalán ha aprobado, en el marco de la planificación hidrológica, el Programa de Actuaciones para

¹² Vid. DOGC núm. 5726, de 1 de octubre de 2010.

la Gestión de los Lodos Residuales Generados en los Procesos de Depuración de Aguas Residuales Urbanas de Cataluña, elaborado por la Agencia Catalana del Agua, en cumplimiento de las previsiones del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas 2005. El objeto de este programa es minimizar el impacto ambiental derivado de la gestión de los lodos y reducir el coste económico de su gestión. Con este fin, establece unos criterios de gestión y define y programa actuaciones para darles el tratamiento adecuado, de conformidad con los principios sancionados por la normativa, consistente en ampliar la capacidad de digestión de las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas y aumentar la capacidad de las plantas de compostaje y de secado. La efectiva ejecución de las actuaciones previstas en este programa conllevará, por una parte, una significativa reducción de los lodos que se destinarán a depósito controlado y, por otra, el incremento de la valorización energética.

2.2. Dos propuestas legislativas de interés

El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda ha elaborado dos anteproyectos de ley de gran interés en materia ambiental, aunque por razones temporales y dada la proximidad de las elecciones autonómicas no han podido cristalizar en la aprobación de sendas leyes y ni tan siquiera iniciar su tramitación como proyectos de ley en esta legislatura. Nos referimos al anteproyecto de Ley de la Biodiversidad y el Patrimonio Natural, por un lado, y al anteproyecto de Ley de Calidad Odorífera, por otro.

A. El anteproyecto de Ley de la Biodiversidad y el Patrimonio Natural

El anteproyecto de Ley de la Biodiversidad y el Patrimonio Natural¹³, sometido a información pública en mayo de este año¹⁴, se elabora con la finalidad de dotar a Cataluña de una ley propia para garantizar la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural, ámbito donde la legislación existente, con la Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales como norma de cabecera, es dispersa y poco actualizada.

¹³ Puede consultarse el contenido de este anteproyecto en el siguiente enlace: http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/participacio_publica/biodiversitat.pdf.

¹⁴ En el DOGC núm. 5624, de 7 de mayo de 2010, se publica el anuncio de información pública de este anteproyecto.

Los motivos que aconsejan la elaboración de una nueva ley catalana de biodiversidad y patrimonio natural son, como consta en el preámbulo del anteproyecto, principalmente, desarrollar la normativa básica estatal establecida por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de la Biodiversidad y del Patrimonio Natural, así como incorporar, actualizar y adaptar la legislación catalana a la legislación comunitaria de protección de la biodiversidad y a los compromisos internacionales asumidos desde la entrada en vigor de la Ley 12/1985 y de la primera ley de protección de animales, ya hace más de veinte años. Al mismo tiempo, se pretende dar respuesta a las nuevas necesidades económicas, sociales y ambientales desde la perspectiva de la conservación del medio natural y dotar a los poderes públicos de instrumentos de diagnosis, planificación, gestión, evaluación y sancionadores eficaces y capaces de adaptarse a la nueva situación.

Partiendo de estas premisas, el anteproyecto de Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la protección, la conservación, el uso sostenible, la gestión, la mejora y la restauración del patrimonio natural y de los elementos culturales y de conocimiento tradicional asociados. Se estructura, a estos efectos, en nueve títulos, seis disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y once disposiciones finales.

El título I contiene las disposiciones generales y establece el objeto, el ámbito territorial de aplicación, los objetivos, los principios rectores, la función social de la conservación del patrimonio natural, los derechos y deberes de la ciudadanía, y los deberes de los poderes públicos. También se incorpora el principio de prevalencia de la protección ambiental, la eficiencia económica y la cohesión social sobre la ordenación territorial y urbanística, así como la integración en las políticas públicas de los requerimientos de la conservación, el uso sostenible, la mejora y la restauración del patrimonio natural.

El título II regula los instrumentos para la planificación de la conservación del patrimonio natural: la Estrategia para la Conservación del Patrimonio Natural y los planes de ordenación de los recursos naturales, cuya incorporación a la legislación catalana supone una novedad al sustituir a los actuales planes especiales de protección del medio natural y del paisaje.

El título III recoge los instrumentos y las medidas de carácter general para la conservación del patrimonio natural. La Ley parte de la consideración de que su

cumplimiento efectivo depende de la acción conjunta y global de las diferentes políticas sectoriales y de una regulación de la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural desde una perspectiva más amplia. Desde esta perspectiva, se refiere a la integración de la conservación del patrimonio natural en las políticas públicas (de agricultura y ganadería, de pesca marítima y de gestión del litoral, forestales, hidrológicas, mineras y energéticas...); a la permeabilidad y conectividad ecológicas del conjunto del territorio, que deben garantizar las políticas públicas, incorporando como nuevo instrumento el Plan de Conectividad Ecológica de Cataluña; a la responsabilidad exterior en la conservación del patrimonio natural; y al patrimonio natural y a la evaluación ambiental, estableciendo los criterios a seguir en la adopción de las medidas compensatorias que se adopten en el marco de los procedimientos de las evaluaciones ambientales.

El título IV recoge los instrumentos y las medidas de carácter específico para la conservación del patrimonio natural y contiene seis capítulos dedicados a la conservación de las especies y poblaciones silvestres, la conservación de la diversidad genética, la conservación de los hábitats, la conservación del patrimonio geológico, el sistema de espacios naturales protegidos y otros espacios con finalidades de conservación del patrimonio natural. Entre los aspectos más innovadores de la Ley debe destacarse el establecimiento de un sistema de espacios naturales protegidos, con el fin de dar más coherencia interna al conjunto del territorio y reforzar los instrumentos para la conservación, planificación y gestión de áreas protegidas. Este sistema comprende el conjunto de los espacios naturales protegidos, el Plan de Espacios de Interés Natural, el Plan de Acción del Sistema de Espacios Naturales Protegidos, los instrumentos de planificación de cada espacio y los órganos de gobierno, gestión, cooperación y asesoramiento.

El título V regula los instrumentos y las medidas sobre información, conocimientos tradicionales, investigación científica y evaluación en materia de biodiversidad y patrimonio natural, con el fin de permitir el acceso universal a la información y cumplir con el deber de los poderes públicos de facilitar la difusión de conocimientos relativos a la protección y la conservación del patrimonio natural.

El título VI se dedica a los instrumentos y las medidas de participación social. Destaca la inclusión de la custodia del territorio como fórmula para implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos.

El título VII se centra en las competencias y la organización administrativa, prestando especial atención a la participación de los entes locales en la conservación del patrimonio natural. También se prevé la creación de dos órganos: el Consejo Social de la Naturaleza, como órgano de la Administración de la Generalitat, con participación de la ciudadanía y con funciones de deliberación, consulta y asesoramiento; y la Comisión Científica Asesora de la Naturaleza, como órgano consultivo de la Generalitat, con funciones de asesoramiento científico y técnico a la Administración autonómica y al Parlamento.

El título VIII regula los instrumentos económicos, fiscales y financieros, entre los que cabe destacar la creación del Fondo de Conservación del Patrimonio Natural.

Por último, el título IX regula las medidas de cumplimiento de la Ley, con referencia a las infracciones y sanciones administrativas y también a la reparación del daño causado y la restauración. Como novedad, se crea un registro de personas infractoras en relación con el patrimonio natural.

B. El anteproyecto de Ley de la Contaminación Odorífera: un intento pionero de regulación específica de la contaminación por olores a través de una norma de rango legal

El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda también ha elaborado un borrador de anteproyecto de Ley de Calidad Odorífera. La contaminación por olores constituye una materia sobre la cual existe una inquietud importante en Cataluña y en cuya regulación viene trabajándose desde hace algunos años, tanto en la esfera local como en la autonómica. En efecto, a nivel municipal, algunos ayuntamientos catalanes han sido pioneros en la regulación de la contaminación por olores y han aprobado ordenanzas sobre esta materia (es el caso de Lliçà de Vall —cuenta con la Ordenanza de Regulación de la Liberación de Olores a la Atmósfera, de 29 de septiembre de 2000— y de

Banyoles —dispone de la Ordenanza de Olores, de 26 de mayo de 2008—). Y, a nivel autonómico, aunque aún no existe una regulación específica, el camino para conseguir tal fin se inició hace años —a raíz, entre otros factores, de la aprobación de la Resolución 119/VII de la Comisión de Política Territorial del Parlamento catalán, que instaba al Gobierno a presentar un proyecto de ley de contaminación olfatoria; y de la propia intervención del *Síndic de Greuges*, que denunció el vacío normativo existente en esta materia—, habiéndose difundido en el 2005 un borrador de anteproyecto de ley para regular la contaminación odorífera. El nuevo borrador de anteproyecto de Ley de Calidad Odorífera¹⁵, difundido en febrero del 2010, elaborado sobre la base del anterior, contribuye a su desarrollo y mejora, con el fin de disponer de un instrumento de utilidad, e incorpora algunos de los comentarios y las sugerencias realizados al borrador del 2005 por parte de diferentes organismos, administraciones y entidades tanto públicas como privadas.

El anteproyecto de Ley de Calidad Odorífera pretende cubrir el vacío normativo existente en este ámbito y regular y garantizar con precisión y especificidad la calidad odorífera, de forma que se convierta en la regulación de referencia en esta materia. Para ello, proyecta su regulación tuitiva sobre las zonas sensibles a las molestias por olores, inspirándose en los principios generales de prevención y corrección en origen, protección, proporcionalidad, eficiencia social, sostenibilidad, proporcionalidad, colaboración y concienciación.

El objeto es regular las medidas necesarias para prevenir y corregir las molestias por olores generadas por determinadas actividades e infraestructuras en zonas sensibles (definidas como “ámbito domiciliario de las zonas de suelo urbano destinadas a uso residencial”), con dos finalidades concretas: alcanzar un alto nivel de protección y un ambiente de calidad en materia odorífera en zonas sensibles, mediante la prevención y la reducción en origen de las emisiones de compuestos susceptibles de generar olores; y garantizar los derechos de las personas, su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad, su calidad de vida y bienestar y un medio ambiente adecuado en el marco de un desarrollo sostenible.

¹⁵ Puede consultarse el contenido de este anteproyecto en el siguiente enlace: http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/atmosfera/contaminacio_odorifera/avantprojecte.pdf.

A estos efectos, se estructura en seis capítulos, integrados por treinta artículos, dos disposiciones transitorias, cuatro disposiciones finales y dos anexos. En el capítulo 1, dedicado a las disposiciones generales, se establecen el objeto, las finalidades, el ámbito de aplicación y los principios generales de la Ley. En cuanto a su ámbito de aplicación, se extiende a las actividades e infraestructuras con potencial incidencia olfativa en zonas sensibles indicadas en el anexo 1, excluyéndose las molestias por olores generadas por actividades domésticas o vecinales.

El capítulo 2, dedicado a las competencias generales, determina las competencias en este ámbito del Departamento de la Generalitat en materia de medio ambiente, los ayuntamientos y la Administración titular de la infraestructura.

El capítulo 3 recoge los derechos y deberes —generales y específicos— de todas las personas en esta materia, la difusión de información en este ámbito y su proyección sobre la elaboración o, en su caso, la evaluación ambiental de planes y programas que incidan en la implantación o explotación de actividades e infraestructuras.

El capítulo 4, dedicado a la intervención administrativa, regula la incidencia de esta materia en la tramitación de los permisos ambientales requeridos para las actividades y en los procedimientos de aprobación de los proyectos de infraestructuras. También regula este capítulo el régimen de suspensión del deber de garantizar un ambiente de calidad odorífera por razones técnicas, en caso de que las mejores técnicas disponibles no permitan evitar las molestias por olores.

Por último, los capítulos 5 y 6 regulan, respectivamente, la inspección, los requerimientos y las multas coercitivas; y el régimen sancionador.

La Ley también incluye dos anexos: el anexo 1 determina las actividades incluidas en su ámbito de aplicación; y el 2, los valores límite de inmisión de olor para determinadas actividades y la metodología a seguir para la determinación de estos valores.

2.3. La normativa ambiental: aspectos más destacables

A. La entrada en vigor de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades

Sin duda, uno de los aspectos más destacables de la normativa ambiental catalana en el período examinado es la entrada en vigor el pasado 11 de agosto de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. Esta ley, como ya se puso de manifiesto en la crónica correspondiente al número 1 de esta revista, deroga la anterior Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención Integral de la Administración Ambiental, vigente durante más de diez años en Cataluña, e introduce un nuevo régimen de intervención administrativa sobre las actividades limitado únicamente a los aspectos ambientales. A pesar de haber sido aprobada en diciembre del 2009, su entrada en vigor quedaba pospuesta al 11 de agosto de 2010, probablemente con la intención de tener tiempo suficiente durante esos meses para aprobar su reglamento de desarrollo, necesario para su aplicación efectiva. Sin embargo, en el momento de entrada en vigor de esta ley, aún no se ha aprobado su desarrollo reglamentario, objeto de tramitación actualmente. La opción finalmente seguida ha sido la de elaborar dos reglamentos en desarrollo de la Ley: uno en relación con las licencias y comunicaciones; y otro en relación con la autorización ambiental y la autorización sustantiva con evaluación de impacto ambiental que, además, también regularía las entidades colaboradoras de la Administración ambiental. Como se avanzaba, estos reglamentos están siendo tramitados en la actualidad y ya han sido objeto de información pública¹⁶, estando pendientes en estos momentos de la emisión del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. Dada la entrada en vigor de la Ley 20/2009 y los importantes cambios introducidos en el régimen de intervención administrativa sobre las actividades y mientras se aprueban los reglamentos de desarrollo, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda ha elaborado una serie de criterios a aplicar que ha difundido a través de su página web¹⁷. Resulta necesario, sin embargo, que estos reglamentos se aprueben lo más pronto posible en aras de garantizar una aplicación efectiva de la Ley y una mayor seguridad jurídica.

¹⁶ *Vid.* el DOGC núm. 5654, de 21 de junio de 2010.

¹⁷ Pueden consultarse estos criterios en el siguiente enlace: <http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Empresa%20i%20avaluacio%20ambiental/Prevencio%20i%20control%20dactivitats/La%20Llei%20de%20prev%20i%20control%20amb%20dact/Llegislacio%20i%20criteris%20interpretatus/documentos/criteris.pdf>

B. La problemática en torno a las corridas de toros y las fiestas tradiciones con toros

Durante estos últimos meses se ha producido un interesante debate en Cataluña en torno a las corridas de toros y las fiestas tradicionales con toros (*correbous*) que ha cristalizado en la aprobación de dos normas con rango de ley. Por un lado, se ha aprobado la Ley 28/2010, de 3 de agosto, de modificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley de Protección de los Animales, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2008. Esta ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2012, introduce en Cataluña la prohibición de las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, y también de cualquier modalidad de espectáculo taurino que tenga lugar dentro o fuera de las plazas de toros, excepto las fiestas con toros sin muerte del animal (*correbous*) en las fechas y las localidades donde tradicionalmente se celebren. En estos casos, también se prohíbe causar daño a los animales. De esta forma, Cataluña se une a otras comunidades autónomas, como Canarias, que también han optado por prohibir las corridas de toros.

Por otro lado, dos meses después de que el Parlamento catalán prohibiera las corridas de toros, se ha aprobado la Ley 34/2010, de 1 de octubre, de Regulación de las Fiestas Tradicionales con Toros, que blinda los *correbous*, fiestas tradicionales de muchos municipios del sur de Tarragona, y los desliga de la prohibición de las corridas de toros. Esta ley —aprobada a partir de una proposición de ley impulsada por CiU— establece los requisitos y las condiciones que deben cumplir las fiestas tradicionales con toros sin muerte del animal (*correbous*), en las fechas y las localidades catalanas donde tradicionalmente se celebran, con la finalidad de garantizar los derechos, los intereses y la seguridad de los participantes y del público, y, al mismo tiempo, la protección de los animales. La Ley somete a previa autorización de la delegación territorial del Gobierno correspondiente la celebración de cualquier fiesta tradicional con toros y regula los requisitos de esta autorización, así como las condiciones de seguridad que deberán cumplir los recintos para la celebración de estas fiestas; las funciones de los organizadores y controladores del espectáculo; las diferentes modalidades de las fiestas

tradicionales con toros; y las prohibiciones que deberán respetarse. También incluye un régimen sancionador, atribuyendo la competencia sancionadora en este ámbito a los órganos centrales y a los servicios territoriales del departamento competente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. A través de esta norma, el código de buenas prácticas aprobado hace unos años entre la Administración y los actores implicados pasa a tener rango de ley.

C. La normativa en materia de espacios naturales protegidos

En este período han visto la luz varias normas relativas a espacios naturales protegidos. En primer lugar, se han producido nuevas declaraciones de espacios naturales de protección especial. Por una parte, a través de la Ley 15/2010, de 28 de mayo, se han declarado el Parque Natural del Montgrí, las Islas Medes y el Bajo Ter, y, dentro del ámbito del Parque Natural, la reserva natural parcial marina de las Medes, la reserva natural parcial de los humedales del Bajo Ter y la reserva natural integral de las Islas Medes¹⁸. Esta ley establece un marco jurídico y crea los mecanismos de planificación, gestión y protección de la legalidad necesarios para conservar y, en su caso, restaurar los sistemas naturales terrestres y marinos de los espacios de protección especial que se declaran, y para promover los valores geológicos, botánicos, faunísticos, ecológicos, paisajísticos, culturales, educativos, científicos, productivos y sociales que contienen. También delimita definitivamente el espacio del Plan de Espacios de Interés Natural, a los efectos de lo previsto en el artículo 16.2 de la Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales de Cataluña. La Ley 15/2010 también habilita al Gobierno para que, mediante decreto, pueda ampliar el ámbito establecido del Parque Natural y de las reservas naturales parciales y también mejorar los límites; actualizar las cantidades de las sanciones y las multas coercitivas fijadas por esta ley, teniendo en cuenta las variaciones del índice de precios al consumo; y dictar las normas necesarias para

¹⁸ Esta ley deroga la Ley 19/1990, de 10 de diciembre, de Conservación de la Flora y la Fauna del Fondo Marino de las Islas Medes, sin perjuicio de lo establecido por la disposición transitoria cuarta; el Decreto 253/2000, de 24 de julio, de creación del Patronato para el Desarrollo Sostenible de los Espacios de Interés Natural del Macizo del Montgrí y el Archipiélago de las Medes; y el artículo 3 del Decreto 222/2008, de 11 de noviembre, por el cual se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Área Protegida de las Islas Medes, que hace referencia a la creación del Consejo Asesor del Área Protegida de las Islas Medes. También deja sin efecto la Resolución de 14 de febrero de 2000, por la cual se hace público el Acuerdo de Gobierno, de 10 de enero de 2000, mediante el cual se aprueba definitivamente el Plan Especial de Delimitación Definitiva del Espacio del Plan de Espacios de Interés Natural del Montgrí.

desarrollar y aplicar esta ley. Asimismo, el departamento competente en materia de medio ambiente, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta ley, debe elaborar y presentar el Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje del Parque Natural del Montgrí, las Islas Medes y el Bajo Ter, para que se apruebe siguiendo la tramitación establecida para los planes especiales de los espacios naturales protegidos. En el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de este plan especial, y de acuerdo con las disposiciones establecidas por este plan, debe elaborarse y presentarse el plan rector de uso y gestión de este espacio natural.

Por otra, el Decreto 146/2010, de 19 de octubre, ha declarado la sierra de Collserola como espacio natural de protección especial mediante su declaración como parque natural, con dos reservas naturales parciales (la Font Groga y la Rierada-Can Balasc), con el fin de hacer posible la conservación del patrimonio natural y cultural de forma compatible con el aprovechamiento ordenado de sus recursos y con la actividad de sus habitantes, en el marco de la regulación establecida por la Ley catalana 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales, y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Este decreto fija los objetivos de este parque y de las dos reservas naturales parciales, y establece algunas previsiones sobre el régimen urbanístico y las normas básicas de protección del Parque, la ordenación y planificación de este espacio, y el Plan Especial para la Protección del Medio Natural y el Paisaje que habrá de ordenar este espacio. También prevé la existencia, en este parque, de unas áreas denominadas espacios de regulación especial (ERE), y definidas como sectores con mayor vinculación a la trama urbana, ya sea por la presencia de edificaciones, ya sea por sus características de ámbitos de enlace entre los sistemas naturales y los espacios verdes de la ciudad. El objetivo de la previsión de estos espacios de regulación especial es permitir el establecimiento de una regulación urbanística que garantice la relación armónica entre la ciudad y el Parque, ordenar el uso público y dignificar el carácter de los espacios periurbanos, y permitir el desarrollo de actuaciones de interés público, social o comunitario, siempre de manera coherente con su naturaleza de espacio natural de protección especial. Por último, este decreto también regula algunos aspectos relacionados con la organización y gestión del Parque y su régimen de financiación. Con relación al Parque Natural de Collserola, mediante el Acuerdo del

Gobierno GOV/189/2010, de 19 de octubre¹⁹, se ha aprobado la integración de la Administración de la Generalitat de Cataluña en el Consorcio de este parque —integrado por la Diputación de Barcelona, la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona, y los ayuntamientos del Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola y Sant Cugat del Vallès—, así como los nuevos estatutos de este consorcio y la aportación económica (717.960 euros) del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda a este consorcio.

En segundo lugar, en este período, el Gobierno de la Generalitat también ha aprobado definitivamente el Plan Especial de la Zona Volcánica de la Garrotxa, mediante el Acuerdo del Gobierno GOV/161/2010, de 14 de septiembre²⁰; y el Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje de los Espacios Naturales Protegidos de la Llanura de Lleida y el plan de gestión de estos espacios, mediante Acuerdo del Gobierno GOV/185/2010, de 11 de octubre²¹. El nuevo Plan Especial de la Zona Volcánica de la Garrotxa sustituye al anterior —aprobado por el Decreto 82/1994, de 22 de febrero, y modificado por el Decreto 160/1997, de 25 de junio—, y constituye el instrumento básico de ordenación de este parque natural, de acuerdo con la Ley 12/1985, de Espacios Naturales Protegidos. Su objetivo es adaptar el plan especial de este espacio natural a las nuevas necesidades mediante su revisión. La revisión viene motivada por diferentes factores: las modificaciones significativas del ámbito del Parque Natural, con la incorporación de nuevas zonas a las que extender la ordenación; el mayor conocimiento del territorio y la mayor experiencia de gestión, así como la existencia de medios técnicos más evolucionados; la aparición de nuevos retos territoriales, requerimientos sociales y realidades que el Parque debe asumir; y los cambios producidos tanto en el ámbito legislativo general como, en particular, en el ámbito del planeamiento urbanístico y territorial, junto con los nuevos requerimientos derivados de la integración del Parque en la Red Natura 2000. En cuanto al Plan

¹⁹ DOGC núm. 5745, de 29 de octubre de 2010.

²⁰ DOGC núm. 5735, de 15 de octubre de 2010.

²¹ DOGC núm. 5755, de 15 de noviembre de 2010. Este acuerdo deroga el Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje del Espacio Natural Protegido de Alfés, aprobado mediante el Acuerdo del Gobierno de 9 de junio de 1998.

Especial de Protección y el Plan de Gestión de los Espacios Naturales Protegidos de la Llanura de Lleida, se trata de planes que se aplican a varios espacios de la Red Natura 2000 (Secans del Segrià i Utxesa, Secans de Mas de Melons-Alfés, Secans de Belianes-Preixana, Anglesola-Vilagrassa, Plans de Sió, Granyena, Bellmunt-Almenara, Secans de la Noguera y Plans de la Unilla) y que, con la regulación de los usos y las actividades en estos espacios y la determinación de la gestión a aplicar, pretenden conservar el patrimonio natural que engloban y ordenar las actividades socioeconómicas para hacerlas compatibles con la conservación de sus valores. De este modo se cumple, además, con las necesarias medidas de planificación de estos espacios en aplicación del derecho comunitario —se trata de espacios incluidos en la tercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea, recogida en la Decisión 2010/45/EU, de 22 de diciembre de 2009—.

Por último, el Decreto 166/2010, de 9 de noviembre, ha modificado el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN), aprobado por el Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, en relación con el espacio del Moianès. Concretamente, se han modificado su denominación, que pasa a ser espacio del Moianès y la *riera* de Muntanyola, y los límites y las determinaciones del espacio contenidos en los documentos del Plan.

D. Algunas novedades en la legislación de residuos

En materia de residuos se han aprobado tres decretos de interés que, además de aprobar diferentes programas de gestión de residuos (PROGREMIC, PROGRIC y PROGROC), introducen algunas novedades normativas de interés. Se trata de los decretos 87/2010, 88/2010 y 89/2010, todos ellos de 29 de junio. El Decreto 87/2010, además de aprobar el PROGREMIC, regula sucintamente el procedimiento para la aprobación del Plan de Desarrollo de la Recogida Selectiva de la Fracción Orgánica previsto en el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, y la distribución de la recaudación de los cánones que gravan la disposición del desperdicio de los residuos municipales. El Decreto 88/2010, que aprueba el PROGRIC, también modifica determinados preceptos del Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. Concretamente, modifica el apartado 2 del artículo 6, el artículo 7, el apartado 2 del artículo 28 y el artículo 31, e introduce un nuevo artículo 31 bis. Y el Decreto

89/2010²², además de aprobar el PROGROC, regula el régimen de la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición en el ámbito territorial de Cataluña, desarrollando la normativa básica estatal contenida en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y desarrolla la regulación del canon sobre disposición controlada de los residuos de la construcción que efectúa la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Financiación de las Infraestructuras de Gestión de los Residuos y de los Cánones sobre la Disposición de Desperdicio de los Residuos.

E. Otras normas de interés

En el período objeto de análisis también se han aprobado otras normas de interés. Destacamos, en primer lugar, el Decreto catalán 68/2010, de 25 de mayo, sobre tramitación y aprobación de los documentos reconocidos del Código Técnico de la Edificación y del Registro General del Código Técnico de la Edificación²³. Este decreto, adoptado de acuerdo con las competencias que el Estatuto de Autonomía otorga a la Generalitat en su artículo 137, tiene por objeto establecer el procedimiento de tramitación y aprobación de los documentos reconocidos del Código Técnico de la Edificación, con el fin de adecuar este código a las concretas exigencias del territorio y de la población de Cataluña. El cumplimiento de esta finalidad se realiza a través de la Subcomisión sobre la aplicación del Código Técnico de la Edificación en Cataluña, que se adscribe al Consejo de Calidad, Sostenibilidad e Innovación de la Vivienda, a quien corresponde emitir los informes técnicos sobre las solicitudes de reconocimiento de los documentos presentados, para la aprobación de los documentos reconocidos por parte del órgano competente en materia de calidad de la edificación. También crea el Registro General del Código Técnico de la Edificación de Cataluña, adscrito al órgano competente en materia de calidad de la edificación, que tiene carácter de registro público estrictamente a los efectos de información y de publicidad para los agentes,

²² Este decreto deroga el Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de las runas y otros residuos de la construcción, y el Decreto 161/2001, de 12 de junio, de modificación del anterior.

²³ Este decreto modifica, en su disposición adicional primera, los artículos 2 y 3 y añade un nuevo artículo, el 13, al Decreto 41/2010, de 23 de marzo, por el cual se crea el Consejo de Calidad, Sostenibilidad e Innovación de la Vivienda; y, en su disposición adicional segunda, modifica la disposición final 1.2 del Decreto 13/2010, de 2 de febrero, del Plan para el Derecho a la Vivienda de 2009-2012.

organismos y entidades que ejerzan funciones relacionadas con la aplicación del Código Técnico de la Edificación. En él deben inscribirse los documentos reconocidos aprobados por el órgano competente en materia de calidad de la edificación.

En segundo lugar, el Decreto 104/2010, de 3 de agosto, mediante el cual se aprueba el despliegue territorial de la Agencia Catalana del Agua²⁴. Este decreto completa el proceso de modificación de la estructura territorial de la Agencia Catalana del Agua iniciado con los decretos 175/2001, de 26 de junio, mediante el cual se aprueba el despliegue territorial de la Agencia Catalana del Agua, y 86/2009, de 2 de junio, de aprobación de los Estatutos de la Agencia Catalana del Agua y de modificación del Decreto 175/2001, con el objeto de alcanzar una gestión más eficaz y próxima a la ciudadanía y favorecer su participación. Con este fin, establece que la Agencia Catalana del Agua ejerce sus funciones y potestades y presta los servicios de su competencia de manera descentralizada en el territorio mediante seis demarcaciones territoriales (Girona, Tordera-Besòs, Llobregat-Foix, Tarragona, Lleida y Terres de l'Ebre). Al frente de cada una de estas demarcaciones territoriales habrá un jefe de demarcación, designado por el director de la Agencia y bajo la dependencia jerárquica y funcional del gerente de la Agencia. Los servicios territoriales del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda ejercerán de órgano de coordinación entre el Departamento y las demarcaciones territoriales de la Agencia Catalana del Agua.

En tercer lugar, a través del Decreto 114/2010, de 31 de agosto, se crea el Observatorio de la Alimentación y la Agricultura Ecológicas de Cataluña, que se adscribe a la dirección general competente en el ámbito de la planificación y las relaciones agrarias. La finalidad de este observatorio es conocer y analizar la realidad del sector y las principales cuestiones que le afectan, fundamentalmente desde el punto de vista económico y estructural. Se trata de un órgano técnico, consultivo y asesor del departamento competente en materia de agricultura, ganadería y alimentación cuyas

²⁴ Este decreto deroga el Decreto 175/2001, de 26 de junio, mediante el cual se aprueba el desarrollo territorial de la Agencia Catalana del Agua y la disposición final del Decreto 86/2009, de 2 de junio, de aprobación de los Estatutos de la Agencia Catalana del Agua y de modificación del Decreto 175/2001, que aprueba el desarrollo territorial de la Agencia Catalana del Agua. Asimismo, modifica la denominación del Decreto 86/2009, de 2 de junio, que pasa a denominarse Decreto 86/2009, de 2 de junio, de aprobación de los Estatutos de la Agencia Catalana del Agua.

funciones son estrictamente técnicas en los ámbitos de la información, el estudio, la consulta y el asesoramiento en materia de alimentación y de agricultura ecológicas.

En cuarto lugar, en relación con el Consorcio Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), se ha aprobado el Decreto 124/2010, de 7 de septiembre, que modifica el Decreto 300/1987, de 4 de agosto, de constitución de este consorcio, con el fin de hacer más operativo su funcionamiento y adaptarlo a las nuevas necesidades. Mediante el Acuerdo del Gobierno GOV/155/2010, de 7 de septiembre, se han aprobado los Estatutos de este consorcio. Este consorcio, creado, sin ánimo de lucro, con la finalidad de promover la investigación, los estudios y la enseñanza en el campo de la ecología y las aplicaciones forestales, está integrado por la Generalitat de Cataluña, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona, el Institut d'Estudis Catalans, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La participación de la Generalitat en este consorcio se instrumentará por medio de los departamentos competentes en los ámbitos de medio ambiente, política territorial, agricultura y acción rural, investigación e innovación, y prevención, extinción de incendios y salvamentos.

Por último, mediante la Orden MAH/469/2010, de 22 de septiembre, se han modificado las bases reguladoras de subvenciones del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda para adecuarlas a las nuevas exigencias del capítulo IX del texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, modificado por la Ley 5/2008, de 24 de abril, y la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. Concretamente, se modifican los apartados de varias órdenes correspondientes a los requisitos de los destinatarios de las subvenciones, a la documentación a aportar junto con la solicitud de subvención y a las obligaciones de los beneficiarios²⁵.

²⁵ Se modifican las bases reguladoras de las subvenciones reguladas en las siguientes órdenes del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda: MAH/444/2009, de 7 de octubre; MAH/244/2008, de 15 de mayo; MAH/122/2005, de 29 de marzo; MAH/424/2008, de 22 de septiembre; MAH/189/2009, de 7 de abril; MAH/159/2006, de 29 de marzo; MAH/230/2009, de 5 de mayo; MAH/386/2005, de 13 de septiembre; MAH/202/2007, de 8 de junio; MAH/203/2007, de 8 de junio; MAH/137/2007, de 26 de abril; MAH/458/2008, de 16 de octubre; MAH/174/2009, de 1 de abril; MAH/262/2010, de 22 de abril; MAH/279/2007, de 24 de julio; MAH/111/2008, de 12 de marzo; MAH/214/2009, de 24 de abril; MAH/214/2010, de 29 de marzo; MAH/177/2010, de 22 de marzo; y MAH/215/2010, de 1 de abril.

Sumari. 1. Dret estatal aplicable a Catalunya. 1.1. La modificació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. 1.2. Algunes novetats organitzatives: la modificació de l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. 1.3. Les novetats en matèria d'aigües. A. La transposició de la Directiva 2007/60/CE del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, relativa a l'avaluació i a la gestió dels riscos d'inundació. B. La modificació del Reglament de planificació hidrològica per evitar demores addicionals en el procés de planificació en curs. 1.4. L'aprovació del primer Programa de Desenvolupament Rural Sostenible. 1.5. La ratificació del Protocol sobre avaluació ambiental estratègica al Conveni sobre l'avaluació de l'impacte en el medi ambient en un context transfronterer. 1.6. Altres normes d'interès. 2. Dret i polítiques ambientals autònòmiques. 2.1. Les polítiques ambientals a Catalunya: estratègies i programes. A. L'Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. B. Els programes de gestió de residus municipals, residus industrials i residus de la construcció. C. El Programa d'Actuacions per a la Gestió dels Fangs Generats en els Processos de Depuració d'Aigües Residuials Urbanes. 2.2. Dues propostes legislatives d'interès. A. L'avantprojecte de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural. B. L'avantprojecte de llei de la contaminació odorífera: un intent pioner de regulació específica de la contaminació causada per olors a través d'una norma de rang legal. 2.3. La normativa ambiental: aspectes més destacables. A. L'entrada en vigor de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. B. La problemàtica entorn de les corregudes de toros i de les festes tradicionals amb toros. C. La normativa en matèria d'espais naturals protegits. D. Algunes novetats pel que fa a la legislació de residus. E. Altres normes d'interès.

1. Dret estatal aplicable a Catalunya

L'activitat normativa que l'Estat ha desplegat en matèria de protecció del medi ambient durant el període objecte d'anàlisi s'ha realitzat fonamentalment a través de normes reglamentàries. Durant aquest període, únicament ha vist la llum una norma de rang legal, si bé no es tracta pròpiament de l'elaboració d'una nova llei, sinó de la modificació d'una que ja existia. Ens referim a la Llei 13/2010, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, per perfeccionar i ampliar el règim general de comerç de drets d'emissió i incloure-hi l'aviació. A més d'aquesta llei, també hem de destacar especialment algunes normes reglamentàries d'interès, com les que reestructuren el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, regulen l'avaluació i la gestió dels riscos d'inundació, modifiquen el Reglament de planificació hidrològica, i aproven el primer Programa de Desenvolupament Rural Sostenible; així com les que ratifiquen el Protocol sobre avaluació ambiental estratègica al Conveni sobre l'avaluació de l'impacte en el medi ambient en un context transfronterer, fet a Kíev el 21 de maig de 2003.

1.1. La modificació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle

El règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle ha estat objecte de modificacions importants mitjançant la Llei 13/2010, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Llei 1/2005, de 9 de març, per perfeccionar i ampliar el règim general de comerç de drets d'emissió i incloure-hi l'aviació. L'aprovació d'aquesta llei era del tot necessària per adaptar la legislació espanyola al nou marc jurídic comunitari en aquest àmbit. Efectivament, l'aprovació de les dues directives que revisen la Directiva 2003/87/CE del Parlament europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003 (la Directiva del Parlament europeu i del Consell 2008/101/CE, de 19 de novembre de 2008, que inclou les emissions derivades de les activitats del sector de l'aviació en el règim comunitari de comerç de drets d'emissió; i la Directiva 2009/29/CE, de 23 d'abril, que escomet la revisió en profunditat d'aquest règim comunitari a fi d'harmonitzar el règim de drets de comerç d'emissió per aprofitar-ne millor els beneficis potencials, evitar distorsions en el mercat comunitari interior, facilitar vincles entre règims de comerç de drets d'emissió, incrementar-ne la previsibilitat i ampliar l'àmbit d'aplicació del règim per donar cabuda a nous sectors i gasos que compleixen les condicions necessàries perquè es regulin mitjançant un instrument normatiu d'aquesta mena), exigia modificar la Llei 1/2005.

La Llei 13/2010 té un únic article que, mitjançant diversos apartats, modifica diversos preceptes de la Llei 1/2005, i es completa amb una disposició transitòria, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. Les disposicions són de caràcter marcadament ambiental, tant per l'objectiu —reduir les emissions d'efecte hivernacle— com per l'origen —els compromisos assumits d'acord amb el Protocol de Kioto i les directives comunitàries—. Per això, bona part de les disposicions s'adopten en el marc de l'article 149.1.23 de la Constitució (les relatives a les autoritzacions d'emissió, les obligacions de seguiment de les emissions, de remissió d'informació i verificació), sense perjudici que s'invoqui també l'article 149.1.13, en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica (per a les modificacions del mercat de drets d'emissió).

Les novetats que introduceix aquesta llei són moltes, tot i que algunes no entraran en vigor fins a l'1 de gener de 2012 o l'1 de gener de 2013¹. Atès el volum de modificacions incorporades, només en destacarem les més importants. En primer lloc, la inclusió del sector de l'aviació en el règim de comerç de drets d'emissió, la qual cosa fa necessari introduir les corresponents actualitzacions, modificacions i adaptacions en diferents preceptes de la Llei 1/2005. Existeixen, a més a més, altres canvis quant a l'àmbit d'aplicació, atès que s'inclouen sectors industrials nous en l'annex 1 (com la producció d'alumini, coure, zinc i metalls no ferris en general, l'assecament i guix calcinat, la producció d'àcid nítric...) i apareixen gasos diferents del CO₂, com els perfluorocarburs en la producció d'alumini, i l'òxid nitrós en la fabricació d'alguns productes en l'indústria química.

En segon lloc, la llei introduceix algunes novetats en el règim d'autoritzacions d'emissió de gasos d'efectes hivernacle, com són la necessitat de revisar les autoritzacions almenys cada cinc anys i la integració del pla de seguiment en l'autorització i l'establiment d'obligacions sobre l'ús de sistemes automatitzats i formats d'intercanvi de dades.

En tercer lloc, a partir de l'1 de gener de 2013, desapareixerà el Pla Nacional d'Assignació, que ha estat l'element central en l'assignació de drets d'emissió durant els dos primers períodes d'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió. A partir d'aquesta data, s'adoptarà un enfocament comunitari, tant pel que fa a la determinació del volum total de drets d'emissió, com quant a la metodologia per assignar-los. D'aquesta manera, la quantitat de drets d'emissió es determina a escala comunitària, i el càlcul i la publicació de la quantitat correspon a la Comissió Europea, d'acord amb el que estableix la Directiva 2009/29/CE. En aquest nou règim, es preveuen dues fórmules bàsiques a través de les quals s'han d'assignar els drets d'emissió: la subasta de drets d'emissió, que adquireix un paper central com a mètode d'assignació, i l'assignació gratuïta transitòria.

En quart lloc, s'introduceix com a novetat el concepte de període de comerç, que substitueix el que en el règim actual és el període de vigència d'un pla nacional d'assignació. Els drets d'emissió només són vàlids per a un període de comerç donat

¹ Vid. la disposició final segona.

però, un cop finalitzat el període, els havers dels titulars de compte han d'intercanviar-se pels drets corresponents al període següent. En aquest sentit, com estableix el preàmbul de la llei, “*se dice que los derechos son arrastrables entre períodos*”. La durada dels períodes de comerç es fixa en vuit anys.

En cinquè lloc, també hi ha canvis importants en el funcionament del registre de drets d'emissió (a partir de l'1 de gener de 2012 els drets d'emissió s'han de consignar en el registre comunitari únic, per la qual cosa els registres nacionals de drets d'emissió deixen d'exercir un paper important en la gestió del règim comunitari de comerç de drets d'emissió) i en el règim sancionador (provenen fonamentalment de la inclusió del sector de l'aviació).

A l'últim, també es regulen tots els aspectes específics del funcionament del règim de comerç de drets d'emissió per a l'aviació que difereixen del funcionament del règim general (per exemple, en aquest sector no cal disposar d'un règim d'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle i, al seu lloc, les mesures per al seguiment i la notificació s'estableixen en plans de seguiment).

1.2. Algunes novetats organitzatives: la modificació de l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Des del punt de vista organitzatiu, hem de destacar la modificació de l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, efectuada inicialment a través del Reial decret 1227/2010, d'1 d'octubre, i recollida posteriorment en el Reial decret 1443/2010, de 5 de novembre; així com el canvi de la titular del Ministeri (Elena Espinosa ha estat substituïda per Rosa Aguilar).

Amb relació a l'estructura orgànica bàsica del ministeri, inicialment, el Reial decret 1227/2010 ha modificat el Reial decret 1130/2008, de 4 de juliol, d'acord amb el Reial decret 495/2010, de 30 d'abril, pel qual s'aprova l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, amb la finalitat d'aconseguir la màxima eficàcia i racionalitat en l'acció de l'Administració. Les principals modificacions que, de conformitat amb les directrius d'austeritat dictades pel Govern, introduceix aquesta norma en l'àmbit del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, són tres. En primer lloc, es redueixen

dues sotsdireccions generals (se suprimeix la Sotsdirecció General de Polítiques Agroalimentàries, Desenvolupament Rural i Aigua i s'elimina la previsió que el president del Consell Superior Agrari ha de tenir categoria de sotsdirector general). En segon lloc, introduceix diferents modificacions en l'estructura de la Secretaria General del Mar per delimitar amb més precisió les funcions que s'atribueixen a cadascuna de les direccions generals que la integren i adaptar-les als canvis produïts en l'entorn administratiu i legislatiu. Com es posa de manifest en el preàmbul d'aquest reial decret, “*los cambios introducidos están vinculados al ejercicio de las competencias que atribuye a los Estados miembros la Directiva 2008/56/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino, conocida como la Directiva marco sobre la estrategia marina. Asimismo, también se recogen como novedad las funciones que corresponden a la Secretaría General del Mar en relación con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca IUU), como consecuencia del sistema comunitario implantado por el Reglamento (CE) núm. 1005/2008, del Consejo, de 29 de septiembre de 2008*”. La resta dels canvis “*responden a la necesidad de delimitar mejor las funciones que corresponden a la Secretaría General del Mar, en aras de una mayor transparencia y racionalidad, realizando algunos cambios en la denominación de sus Subdirecciones Generales para adecuarlas a los ajustes hechos en las funciones que habrán de ejercer*”. En tercer lloc, preveu, de conformitat amb l'article 18.2 de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i de funcionament de l'Administració General de l'Estat, i segons la interpretació jurisprudencial d'aquest precepte, l'excepció a la reserva funcionarial en el nomenament dels titulars de la Direcció General de l'Aigua i de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, per exercir millor les seves funcions i en atenció a les característiques que hi concorren. D'aquesta manera, es permet que el nomenament dels titulars d'aquestes direccions generals pugui realitzar-se a favor de persones que exerceixin o hagin exercit càrrecs o llocs de treball relacionats en la disposició addicional tercera, en la nova redacció, d'acord amb la qualificació professional i experiència en els àmbits respectius. Com adverteix el preàmbul, “[*se trata en definitiva de poder aprovechar la cualificación y experiencia de personas que han sido seleccionadas con arreglo a los principios de mérito y capacidad y han desarrollado su carrera profesional en el sector público, habiendo adquirido*

experiencia en instituciones comunitarias, o en las distintas formas organizativas (agencias, entidades públicas, sociedades estatales...) que el legislador ha ido diseñando para la gestión de políticas públicas en los últimos años”.

Posteriorment, després de la reestructuració de departaments ministerials efectuada pel Reial decret 1313/2010, de 20 d’octubre, i després de l’aprovació del Reial decret 1366/2010, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, s’ha adoptat el Reial decret 1443/2010, de 5 de novembre, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i es deroga el Reial decret 1130/2008, modificat pel Reial decret 1227/2010. Després d’aquestes modificacions normatives, continua corresponent a aquest ministeri la proposta i l’execució de la política del Govern en matèria de lluita contra el canvi climàtic; la protecció del patrimoni natural, de la biodiversitat i del mar; de l'aigua; del desenvolupament rural; dels recursos agrícoles, ramaders i pesquers, i de l'alimentació. La configuració de les polítiques pròpies del departament ministerial esmentat no s’ha vist alterada, per tant, després d'aquesta reestructuració, que es manté entorn de dues secretaries d'estat —la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic² i la Secretaria d'Estat de Medi Rural i Aigua³— i de la Sotssecretaria⁴ i la Secretaria General del Mar⁵. No obstant això, com a conseqüència del Reial decret 1366/2010, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, a fi d’assolir més racionalització i equilibri intern, s’aborda la reordenació de les funcions i competències entre òrgans superiors i directius. A la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic s’hi integren la Direcció General de Medi Natural i Política Forestal, abans adscrita a la Secretaria d'Estat de Medi Rural i Aigua, i la Direcció General de

² De la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic en depenen els següents òrgans directius: l'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic, amb rang de Direcció General, la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, la Direcció General de Medi Natural i Política Forestal, i la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar.

³ De la Secretaria d'Estat de Medi Rural i Aigua en depenen els següents òrgans directius: la Secretaria General de Medi Rural, amb rang de Sotssecretaria, de la qual en depenen les direccions generals de Recursos Agrícoles i Ramaders, Desenvolupament Sostenible i Medi Rural i Indústria i Mercats Alimentaris, i la Direcció General de l'Aigua.

⁴ De la Sotssecretaria en depenen els següents òrgans directius: la Secretaria General Tècnica i la Direcció General de Serveis.

⁵ De la Secretaria General del Mar en depenen els següents òrgans directius: la Direcció General d'Ordenació Pesquera i la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura.

Sostenibilitat de la Costa i del Mar, abans adscrita a la Secretaria General del Mar. D'aquesta manera, la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic concentra les polítiques del departament més directament relacionades amb la protecció del medi ambient. Per la seva banda, la Secretaria d'Estat de Medi Rural i Aigua assumeix les polítiques del ministeri referents a la definició dels objectius i programes derivats de la directiva marc de l'aigua, la gestió directa del domini públic hidràulic, la política agrícola comuna, polítiques agroalimentàries, el desenvolupament sostenible del medi rural i del territori. Així mateix es manté l'excepció a la reserva funcional en el nomenament dels titulars de la Direcció General de l'Aigua i de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar.

En l'àmbit organitzatiu, també hem d'esmentar el Reial decret 718/2010, de 28 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 795/1989, de 23 de juny, pel qual es regula l'organització i el funcionament de l'Institut d'Astrofísica de Canàries; l'Estatut de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, aprovat pel Reial decret 1950/2000, d'1 de desembre; l'Estatut de l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària, aprovat pel Reial decret 1951/2000, d'1 de desembre; l'Estatut del Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques, aprovat pel Reial decret 1952/2000, d'1 de desembre; l'Estatut de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, aprovat pel Reial decret 1953/2000, d'1 de desembre, i l'Estatut de l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques, aprovat pel Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre. I l'Ordre ARM/2616/2010, de 5 d'octubre, per la qual s'estableixen la composició i el funcionament del Comitè de Participació en el marc del Consell Interministerial d'Organismes Modificats Genèticament.

1.3. Les novetats en matèria d'aigües

En matèria d'aigües, han vist la llum dues normes d'interès. D'una banda, el Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i de gestió dels riscos d'inundació, que trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2007/60/CE, de 23 d'octubre de 2007. I de altra, el Reial decret 1161/2010, de 17 de setembre, que modifica el Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de planificació hidrològica.

A. La transposició de la Directiva 2007/60/CE del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, relativa a l'avaluació i a la gestió dels riscos d'inundació

Mitjançant el Reial decret 903/2010, de 9 de juliol⁶, s'ha incorporat a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2007/60/CE del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, relativa a l'avaluació i a la gestió dels riscos d'inundació, que introduceix criteris per gestionar aquest tipus de riscos que han d'aplicar els països membres de la Unió Europea. Així, es completa el marc jurídic regulador espanyol en aquesta matèria, constituït pel text refós de la llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional, modificada per la Llei 11/2005, de 22 de juny; la normativa de protecció civil (en particular, la directriu bàsica de planificació de protecció civil davant el risc d'inundacions, aprovada per Acord del Consell de Ministres de 9 de desembre de 1994, en el marc de la Llei 2/1985, de 21 de gener, de protecció civil, i la norma bàsica de protecció civil, aprovada pel Reial decret 407/1992, de 24 d'abril); la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes i el Reial decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament i execució; el Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei del sòl, i el Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril (modificat recentment en aquest punt pel Reial decret 9/2008, d'11 de gener, que, tot i que no trasllada la

⁶ Aquest reial decret té caràcter de legislació bàsica, ja que s'ha dictat a l'empara de les competències que corresponen a l'Estat en l'article 149.1.13 i 23 de la Constitució per dictar les bases de l'activitat econòmica i de protecció del medi ambient, respectivament, llevat dels articles 14, 15, 19 i 21, que es dicten basant-se en la competència exclusiva que correspon a l'Estat en matèria de seguretat pública, conforme a l'article 149.1.29 de la Constitució, i l'article 20, que es dicta en virtut del que disposa l'article 149.1.3 de la Constitució, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de relacions internacionals.

Directiva 2007/60/CE, incorpora els criteris que aquesta directiva estableix pel que fa a zones inundables).

L'objecte d'aquest reial decret, que consta de 6 capítols, 22 articles i 1 annex, és regular procediments per realitzar l'avaluació preliminar del risc d'inundació, els mapes de perillositat i risc, i els plans de gestió de riscos d'inundació en tot el territori espanyol. Els principals objectius són obtenir el coneixement adequat i l'avaluació dels riscos associats a les inundacions, i aconseguir l'actuació coordinada de totes les administracions públiques i de la societat per reduir les conseqüències negatives de les inundacions. D'aquesta manera, es compleix el mandat de la directiva de reduir les conseqüències negatives, associades a les inundacions, per a la salut humana, el medi ambient, el patrimoni cultural, l'activitat econòmica i les infraestructures.

Amb aquests objectius, s'aplica a les inundacions ocasionades pel desbordament de rius, torrents de muntanya i la resta de corrents d'aigua continuo o intermitents, així com a les inundacions causades pel mar a les zones costaneres i les que es produueixen per l'acció conjunta de rius i mar a les zones de transició. I s'introdueixen una sèrie instruments per fer efectives la prevenció i la protecció contra els riscos d'inundació que es concreten en l'avaluació preliminar del risc d'inundació, els mapes de perillositat i de risc i els plans de gestió del risc d'inundació. També es recullen algunes disposicions complementàries de coordinació sectorial, participació pública i coordinació entre les diferents administracions públiques, necessàries per aconseguir els objectius proposats.

Com es recull en el preàmbul, els beneficis de l'aplicació d'aquest reial decret deriven d'un doble efecte: "*Por una parte la introducción de las nuevas herramientas de gestión agilizará la implantación de los mecanismos de protección de los cauces y de las zonas inundables, lo que redundará en evitar o disminuir los daños ambientales y sobre los bienes y personas que se protegen. Por otra parte, el conjunto de disposiciones introducidas en el Real Decreto permiten responder de modo más eficaz ante las fuertes presiones de ocupación que sufren las zonas limítrofes con los cauces, lo que redundará en una disminución de los daños derivados de las inundaciones por avenidas*".

B. La modificació del Reglament de planificació hidrològica per evitar demores addicionals en el procés de planificació en curs

A través del Reial decret 1161/2010, de 17 de setembre, s'ha modificat de forma puntual el Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de planificació hidrològica, a fi de solucionar transitòriament una problemàtica concreta que es planteja en el procés d'elaboració de nous plans hidrològics. El problema consisteix en la falta d'efectivitat en la constitució dels consells de l'Aigua de la demarcació, la qual cosa suposa un obstacle important en el procés de planificació hidrològica en curs, atès que aquests òrgans col·legiats, configurats com a òrgans de participació i planificació, participen en l'elaboració de determinats documents del procés planificador. Per fer front a aquesta situació, i, com assenyala el preàmbul del Reial decret 1161/2010, atesa “*la necesidad de evitar demoras adicionales en el proceso de planificación en curso y la superación de los apercibimientos recibidos oficialmente desde la Comisión Europea*”, s'ha optat per una solució transitòria, “*de carácter totalmente excepcional y prevista exclusivamente para superar la presente situación*” i així evita que el procés de planificació hidrològica iniciat es retardi més a causa de la falta d'efectivitat en constitució dels consells de l'aigua en totes o en algunes de les demarcacions hidrogràfiques amb conques intercomunitàries. La solució proposada, efectuada mitjançant la introducció de la disposició transitòria en el Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, consisteix a preveure que, si els consells de l'Aigua de les demarcacions corresponents no estan constituïts, l'informe sobre l'esquema provisional de temes importants en matèria de gestió de les aigües —d'acord amb el que preveu l'article 79.6 del Reglament de planificació hidrològica—l'han d'emetre els actuals consells de l'Aigua de la conca o, si no n'hi ha, la Junta de Govern de l'organisme de conca, i s'ha de requerir la conformitat del comitè d'autoritats competents. Aquest requisit de conformitat d'aquest comitè es justifica pel fet que en els consells actuals de l'Aigua de la conca no existeix ni representació municipal ni de les autoritats competents en aigües costaneres i de transició. A més a més, l'informe corresponent s'ha de completar amb les al·legacions rebudes en el procés de consulta pública.

1.4. L'aprovació del primer Programa de Desenvolupament Rural Sostenible

El Reial decret 752/2010, de 4 de juny, ha aprovat el primer Programa de Desenvolupament Rural sostenible per al període 2010-2014. Aquest programa constitueix el principal instrument d'aplicació de la Llei 45/2007, de 13 de desembre, i s'ha dictat a l'empara del que disposa l'article 149.1.13 de la Constitució, que atribueix a l'Estat la competència sobre bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica. Com posa de manifest el preàmbul d'aquest Reial decret, “*el Programa es el instrumento principal para la planificación de la acción de la Administración General del Estado en relación con el medio rural, por lo que, sin perjuicio de que se incluyan en el mismo medidas específicas que encuentren amparo en otros títulos competenciales, las actuaciones comprendidas en el Programa deben entenderse como una unidad que responde a criterios y objetivos encuadrados en la planificación general de la actividad económica*”.

Per tant, aquest programa s'aprova a fi de concretar mesures de política rural, així com procediments i mitjans per portar-les a terme, tots relacionats amb els objectius de la Llei 45/2007, com són la millora de la situació socioeconòmica i la qualitat de vida de les poblacions de les zones rurals en el marc del respecte ambiental i l'ús sostenible dels recursos naturals. El programa s'aplica a les zones rurals, delimitades i qualificades per les comunitats autònombes que s'incorporen en el capítol 3 d'aquest reial decret, i en concordança amb el que preveu la Llei 45/2007, comprèn un període de cinc anys (2010-2014). L'elaboració s'ha realitzat en col·laboració amb les comunitats autònombes i inclou tant els objectius, els plans i les actuacions sectorials que ha de desplegar l'Administració General de l'Estat, com els concertats amb les administracions de les comunitats autònombes.

Així mateix, amb l'aprovació d'aquest programa, s'engega el procés d'elaboració dels plans de zona rural que han de concretar i incloure les actuacions i mesures necessàries per aconseguir els objectius econòmics, socials i ambientals en el marc de la sostenibilitat, durant el període de durada del Programa de Desenvolupament Rural Sostenible, i d'acord amb les seves determinacions.

1.5. La ratificació del Protocol sobre avaluació ambiental estratègica al Conveni sobre l'avaluació de l'impacte en el medi ambient en un context transfronterer

Des d'una perspectiva internacional, hem de destacar que Espanya ha ratificat el Protocol sobre avaliació ambiental estratègica al Conveni sobre l'avaluació de l'impacte en el medi ambient en un context transfronterer, fet a Kíev el 21 de maig de 2003, mitjançant l'Instrument de ratificació de 24 de juny de 2009⁷. L'objectiu és establir un nivell alt de protecció del medi ambient, inclosa la salut, i garantir que en el desplegament de plans i programes es tinguin en compte de forma exhaustiva les consideracions relatives al medi ambient, inclosa la salut; contribuint a la consideració de les qüestions relatives al medi ambient, inclosa la salut, en l'elaboració de les polítiques i la legislació; establint procediments d'avaluació estatègica nítids, transparents i eficaços; garantint la participació del públic en l'avaluació ambiental estratègica; i integrant, per aquests mitjans, les preocupacions en matèria de medi ambient, inclosa la salut, en les mesures i en els instruments dirigits a promoure el desenvolupament sostenible. Aquest protocol entra en vigor de forma general i per a Espanya l'11 de juliol de 2010, d'acord amb el que estableix l'article 24.

1.6. Altres normes d'interès

A més de la normativa que hem destacat, en aquest període s'han aprovat diverses normes reglamentàries —reials decrets i ordres ministerials—, tant pel que fa a qüestions ambientals com pel que fa a sectors directament o indirectament relacionats amb el medi ambient. Atès l'objectiu d'aquesta crònica, no podem enumerar-les totes, encara que sí que en destaquem algunes d'aprovades en matèria de protecció sanitària contra radiacions ionitzants (Reial decret 1439/2010, de 5 de novembre, de modificació del Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants, aprovat pel Reial decret 783/2001, de 6 de juliol), residus (Reial decret 943/2010, de 23 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus), substàncies i barreges (reials decrets 717/2010, de 28 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses i el Reial decret 255/2003, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos; i 1436/2010, de 5 de novembre, que incorpora al dret

⁷ Publicat al BOE núm. 162, de 5 de juliol.

espanyol la Directiva 2008/112/CE del Parlament europeu i del Consell, de 16 de desembre, que modifica les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE i 1999/13/CE del Consell i les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE i 2004/42/CE del Parlament europeu i del Consell per adaptar-les al Reglament CE 1272/2008, sobre classificació i envasament de substàncies i barreges, pel que fa a les directives de l'àrea mediambiental⁸: Directiva 1999/13/CE del Consell Consell, d'11 de març de 1999, relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils causades per l'ús de dissolvents orgànics en determinades activitats i instal·lacions —incorporada a través del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats—; i la Directiva 2000/53/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 18 de setembre de 2000, relativa als vehicles al final de la seva vida útil —incorporada mitjançant el Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil—; la Directiva 2002/96/CE del Parlament europeu i del Consell, de 27 de gener de 2003, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics —incorporada mitjançant el Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus—; i la Directiva 2004/42/CE del Parlament europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents orgànics en determinades pintures i vernissos i en els productes de renovació de l'acabat de vehicles —incorporada a través del Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en determinades pintures i vernissos en productes de renovació de l'acabat de vehicles—) i protecció civil (Reial decret 1564/2010, de 19 de novembre, pel qual s'aprova la directriu bàsica de planificació de protecció civil davant el risc radiològic).

⁸ Aquest reglament ha d'implicar, a partir l'1 de juny de 2015, la derogació completa de les dues directives comunitàries que regulaven aquesta matèria: la Directiva 67/548/CEE del Consell, de 27 de juny de 1967, relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives en matèria de classificació, embalatge i etiquetatge de les substàncies perilloses, i la Directiva 1999/45/CE del Parlament europeu i del Consell, de 31 de maig de 1999, sobre l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a la classificació, l'envasament i l'etiquetatge de preparats perillosos.

2. Dret i polítiques ambientals autonòmiques

El dret i la política ambientals catalanes en el període objecte d'anàlisi (maig-novembre de 2010) han estat marcats per la proximitat del final de legislatura, atesa la imminent realització d'eleccions autonòmiques el pròxim 28 de novembre. Durant aquest període, pel que fa a estratègies i programes, han vist la llum alguns documents de gran interès, entre els quals destaquem especialment l'aprovació de l'Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya que, amb el punt de mira posat en l'any 2026, fixa eixos, línies estratègiques i objectius estratègics per aconseguir una Catalunya sostenible en l'horitzó que s'ha marcat. Així mateix, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha pres la iniciativa en l'elaboració de dos avantprojectes de Llei, en matèria de biodiversitat i qualitat odorífera, que aspiraven a introduir una nova regulació en aquests àmbits, encara que per raons temporals no han pogut aprovar-se com a lleis en aquesta legislatura. D'altra banda, des del punt de vista normatiu, hem de destacar l'entrada en vigor del nou règim de prevenció i control ambiental de les activitats, introduït per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, fins i tot sense haver aprovat encara els reglaments de desplegament d'aquesta llei; la modificació del text refós de la llei de protecció d'animals per introduir la prohibició de les corregudes de toros, i la regulació, mitjançant una llei específica, de les festes tradicionals amb toros; la declaració de nous espais naturals de protecció especial i l'aprovació d'alguns plans especials de protecció del medi natural i del paisatge, i algunes normes en matèria de residus.

2.1. Les polítiques ambientals a Catalunya: estratègies i programes

Durant el període que hem analitzat, a Catalunya s'han aprovat l'Estratègia per al Desenvolupament Sostenible, i diversos programes en matèria de gestió de residus i de fangs de depuradora.

A. L'Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya

El Govern català, mitjançant l'Acord GOV/127/2010, de 31 d'agost⁹, ha aprovat — seguint la proposta del Conseller de Medi Ambient i Habitatge — l'Estratègia per al

⁹ Vid. DOGC núm. 5710, de 8 de setembre de 2010.

Desenvolupament Sostenible de Catalunya¹⁰, a fi d'impulsar una estratègia en l'àmbit autonòmic que incorpori el concepte de desenvolupament sostenible, que garanteixi la integració d'aquesta noció en el conjunt de polítiques sectorials i en els instruments (tant legislatius com de planificació, de gestió i d'administració) vigents i futurs com a oportunitat per fer front als reptes de futur, i que serveixi, en definitiva, com a instrument per integrar, coordinar i elevar a escala autonòmica una política de desenvolupament sostenible transversal i holística.

Aquesta estratègia, que marca com a horitzó el 2026, ha de convertir-se en el full de ruta que fixa línies i objectius estratègics clau per garantir la transició de Catalunya cap a una economia segura, ecoeficient i amb baix contingut de carboni, basada en la minimització en el consum de recursos, especialment dels no renovables, i en els impactes sobre la salut i el medi a Catalunya i en el món, i que harmonitzi el desenvolupament econòmic amb la millora del benestar i la qualitat de vida de la ciutadania; internalitzi els costos ambientals i el valor dels serveis dels ecosistemes i de la biodiversitat; asseguri la restauració dels efectes ocasionats pels impactes ambientals i la recuperació del capital natural i de la seva funcionalitat; assoleixi una vertadera integració horitzontal i vertical entre les diferents polítiques sectorials i entre els diferents nivells de govern, respectivament, garantint la coherència entre els diversos objectius sectorials; garanteixi la participació de la ciutadania en els processos de presa de decisions, i assoleixi una societat culta, inclusiva, amb igualtat d'oportunitats i solidària.

Aquesta estratègia presenta com a element innovador la concreció i la quantificació dels objectius estratègics de la Catalunya sostenible de 2026. L'Estratègia es vertebrà en set eixos per presentar el model sostenible de la Catalunya de l'any 2026 (Catalunya, un territori biodivers amb ciutats i pobles; Catalunya, eficient en l'ús de l'energia i en l'acció climàtica; Catalunya es mou amb intel·ligència; Catalunya ecoeficient, competitiva i innovadora; Catalunya consumeix amb criteri; Catalunya cívica, inclusiva, solidària, sana i segura, i Catalunya participativa i amb una administració propera), i en

¹⁰ Podeu consultar el contingut de l'Estratègia en l'enllaç següent: <http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/edscat/graf/final.pdf>.

setze línies estratègiques que s'identifiquen com a pautes essencials per garantir la transició eficaç de la situació actual al model sostenible plantejat (Matriu territorial diversa i funcional, eficient en l'ús del sòl; Regeneració i rehabilitació urbana; Gestió integral del patrimoni natural i conservació de la biodiversitat; Activitat agrària, forestal i pesquera sostenible; Més qualitat de vida amb menys energia; Impuls a les fonts d'energia renovables i a la gestió intel·ligent en xarxa; Transport sostenible competitiu; Gestió intel·ligent de les infraestructures i electrificació del transport; Internalització econòmica d'externalitats socioambientals; Ecoeficiència i innovació dels processos productius i desenvolupament de serveis ambientals i socials; Consum racional i qualitat de vida; Comercialització i compra sostenible; Cohesió social; Més qualitat ambiental per a més salut; Educació per al coneixement i capacitat per a la sostenibilitat; Per a una governança més eficient i participativa). La concreció de cada línia estratègica es garanteix mitjançant objectius estratègics que defineixen amb precisió uns escenaris de sostenibilitat caracteritzats per l'elevat grau d'ambició i amb garanties de viabilitat. S'hi estableixen 101 objectius estratègics —quaranta-nou dels quals quantificats—, per garantir, des del punt de vista operatiu, la concreció i la viabilitat del model 2026. Aquests objectius estratègics han estat consensuats pels diferents departaments de la Generalitat i amb un conjunt d'actors socials i econòmics, a fi de garantir el caràcter integrat de l'Estratègia amb la resta de plans i programes de la Generalitat.

Per possibilitar que l'Estratègia es compleixi totalment, també es preveu que caldrà promoure l'elaboració d'un ampli ventall d'instruments per avançar cap a la consecució dels objectius estratègics fixats i, encara que se'n preveu la concreció en el moment d'elaborar el pla d'acció de l'Estratègia, aquests instruments, necessàriament interrelacionats, s'agrupen en sis categories: de planificació; de gestió; econòmics, fiscals i financers; legislatius; socials, i de coordinació interadministrativa.

El desplegament d'aquesta estratègia s'ha de dur a terme mitjançant els plans d'acció departamentals que concreten els instruments i les mesures prioritàries per aconseguir els objectius de l'Estratègia i que s'han d'integrar en el pla marc de seguiment i coordinació de l'Estratègia. A més d'aquests plans, també es preveuen plans d'acció sobre temàtiques específiques que concretin les actuacions prioritàries que cal realitzar

sobre alguna temàtica o sector específic que tingui especial repercussió a l' hora d'assolir objectius de l'Estratègia; i el desenvolupament de criteris per integrar els objectius i les línies estratègiques en els plans, els programes i els textos legislatius que elaborin el Govern i els diferents departaments de la Generalitat. Aquesta integració ha de garantir, junt amb els plans d'acció departamentals, que l'Estratègia s'implanti de manera efectiva.

El seguiment específic de l'Estratègia, així com la gestió tècnica i l'impuls del seudesplegament, els ha de realitzar el departament competent en matèria de medi ambient. També es preveu que l'Estratègia s'avaluarà mitjançant l'elaboració d'un informe biennal per realitzar el balanç dels progressos aconseguits en la consecució dels objectius estratègics, fer l'anàlisi prospectiva de noves necessitats i detectar prioritats emergents.

B. Els programes de gestió de residus municipals, de residus industrials i de residus de la construcció

A Catalunya, al juny de 2010 s'han aprovat tres programes específics per gestionar residus: el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC), el Programa de Gestió de Residus Industrials de Catalunya (PROGRIC) i el Programa de Gestió de Residus de la Construcció (PROGROC)¹¹.

El PROGREMIC determina amb caràcter programàtic la planificació del Govern de la Generalitat per gestionar els residus municipals produïts en l'àmbit territorial de Catalunya i té natura jurídica de pla sectorial de coordinació, d'acord amb l'article 148 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. Aquest nou programa de gestió de residus municipals estableix els objectius en relació amb la gestió de residus municipals que s'han d'aconseguir el 2012 (prevenció en origen: reducció respecte al 2006 del 10% en la generació de residus municipals per càpita; valoració material: 48% de valoració material total dels residus municipals generats, i reducció de la deixalla destinada a disposició final: disminució progressiva de residus sense tractar destinats a incineració o

¹¹ Aquests programes s'han aprovat, respectivament, mitjançant el Decret 87/2010, el Decret 88/2010 i el Decret 89/2010, tots de 29 de juny.

dipòsit controlat fins a aconseguir el 100% de tractament i disposició del 41% de deixalla respecte a la generació total de residus). També determina que les prioritats de les actuacions necessàries per gestionar els residus municipals a Catalunya es fonamenten en els eixos següents: jerarquia de gestió i jerarquia d'actuació, que estableix la jerarquia en les accions que cal realitzar en els tres àmbits d'actuació del Programa (la ciutadania, les organitzacions i les infraestructures). Així mateix, preveu les obligacions dels ens locals respecte al desplegament de mecanismes per aconseguir els objectius establerts en el Programa, el tractament de la fracció resta en les infraestructures de gestió de residus municipals i el subministrament d'informació sobre gestió de residus municipals, i crea un òrgan de coordinació de les actuacions de gestió de residus municipals en l'àmbit general de Catalunya i en relació amb cadascuna de les instal·lacions del Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals.

El PROGRIC determina amb caràcter programàtic la planificació del Govern de la Generalitat per gestionar residus industrials en l'àmbit territorial de Catalunya. Aquest programa estableix per a l'any 2012 l'objectiu de valoració del 82% dels residus generats en el sector productiu de les activitats.

El PROGROC planifica la gestió dels residus de la construcció i de la demolició, produïts o gestionats en l'àmbit territorial de Catalunya, i estableix objectius quantitatius que s'han d'aconseguir el 2012. Aquests objectius són els següents: recollida i gestió controlada de residus de la construcció i demolició (100%); reducció de la generació de residus de la construcció i demolició (10%); reciclatge de residus de la construcció i de demolició (50%); valoració de residus d'envasos de materials de construcció (70%), i recollida selectiva i gestió correcta de residus perillosos (100%).

El seguiment i l'avaluació de les actuacions previstes en aquests tres programes correspon a l'Agència de Residus de Catalunya. Els programes han de ser objecte d'un seguiment i d'una evaluació biennals, d'acord amb els principis de participació pública i de transparència. S'han de revisar, com a màxim en sis anys. La realització d'aquesta revisió i modificació correspon a l'Agència de Residus pel que fa a l'elaboració i a la proposta; i al Govern de la Generalitat, pel que fa a l'aprovació. Per acabar, hem de destacar que les actuacions previstes en els programes les finança l'Agència de Residus

de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els contractes programa subscrits o que han de subscriure l'Agència i el Govern.

C. El Programa d'Actuacions per a la Gestió dels Fangs Generats en els Processos de Depuració d'Aigües Residuales Urbanes

Mitjançant l'Acord GOV/165/2010, de 21 de setembre¹², el Govern català ha aprovat, en el marc de la planificació hidrològica, el Programa d'Actuacions per a la Gestió dels Fangs Residuals Generats en els Processos de Depuració d'Aigües Residuales Urbanes de Catalunya, elaborat per l'Agència Catalana de l'Aigua, en compliment de les previsions del Programa de Sanejament d'Aigües Residuales Urbanes 2005. L'objecte d'aquest programa és minimitzar l'impacte ambiental derivat de la gestió dels fangs i minimitzar-ne el cost econòmic. Amb aquest fi, estableix criteris de gestió i defineix i programa actuacions per donar-hi el tractament adequat, de conformitat amb els principis sancionats per la normativa, consistent a ampliar la capacitat de digestió de les estacions depuradores d'aigües residuals urbanes i ampliar la capacitat de les plantes de compostatge i d'assecament. L'execució efectiva de les actuacions previstes en aquest programa comporta, d'una banda, la reducció significativa dels fangs que es destinaran a dipòsit controlat i, de l'altra, l'increment de la valoració energètica.

2.2. Dues propostes legislatives d'interès

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha elaborat dos avantprojectes de llei de gran interès en matèria ambiental, tot i que per raons temporals i, atesa la proximitat de les eleccions autonòmiques, no han pogut cristal·litzar en l'aprovació de sengles lleis i ni tan sols iniciar-ne la tramitació com a projectes de llei en aquesta legislatura. Ens referim a l'avantprojecte de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural, d'una banda; i a l'avantprojecte de llei de qualitat odorífera, de l'altra.

A. L'avantprojecte de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural

¹² Vid. DOGC núm. 5726, d'1 d'octubre de 2010.

L'avantprojecte de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural¹³, sotmès a informació pública al maig d'aquest any¹⁴, s'elabora amb la finalitat de dotar Catalunya d'una llei pròpia per garantir la conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural, àmbit en què la legislació existent, amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, com a norma de capçalera, és dispersa i està poc actualitzada.

Els motius que aconsellen elaborar una nova llei catalana de biodiversitat i de patrimoni natural són, com consta en el preàmbul de l'avantprojecte, principalment, desplegar la normativa bàsica estatal que estableix la Llei 42/2007, de la biodiversitat i el patrimoni natural, així com actualitzar i adaptar la legislació catalana i incorporar-la a la legislació comunitària de protecció de la biodiversitat i als compromisos internacionals assumits des de l'entrada en vigor de la Llei 12/1985 i de la primera llei de protecció animals, ara ja fa més de vint anys. Al mateix temps, es pretén donar resposta a les noves necessitats econòmiques, socials i ambientals des de la perspectiva de la conservació del medi natural i dotar els poders públics d'instruments de diagnosi, de planificació, de gestió, d'avaluació i sancionadors eficaços i capaços d'adaptar-se a la nova situació.

Partint d'aquestes premisses, l'avantprojecte de llei té com a objecte establir el règim jurídic de la protecció, la conservació, l'ús sostenible, la gestió, la millora i la restauració del patrimoni natural i dels elements culturals i de coneixement tradicional associats. A aquests efectes, s'estructura en nou títols, sis disposicions addicionals, set disposicions transitòries, dos disposicions derogatòries i onze disposicions finals.

El títol I conté les disposicions generals i estableix l'objecte, l'àmbit territorial d'aplicació, els objectius, els principis rectors, la funció social de la conservació del patrimoni natural, els drets i els deures de la ciutadania, i els deures dels poders públics. També incorpora el principi de prevalença de la protecció ambiental, l'eficiència econòmica i la cohesió social sobre l'ordenació territorial i urbanística, així com la integració en les polítiques públiques dels requeriments de la conservació, l'ús sostenible, la millora i la restauració del patrimoni natural.

¹³ Podeu consultar el contingut d'aquest avantprojecte en l'enllaç següent: <http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/participacio_publica/biodiversitat.pdf>.

¹⁴ Al DOGC núm. 5624, de 7 de maig, s'ha publicat l'anunci d'informació pública d'aquest avantprojecte.

El títol II regula els instruments per planificar la conservació del patrimoni natural: l'Estratègia per a la Conservació del Patrimoni Natural i els plans d'ordenació de recursos naturals, la incorporació dels quals a la legislació catalana suposa una novetat, ja que substitueixen els actuals plans especials de protecció del medi natural i del paisatge.

El títol III recull els instruments i les mesures de caràcter general per conservar el patrimoni natural. La llei parteix de la consideració que el compliment efectiu depèn de l'acció conjunta i global de les diferents polítiques sectorials i de la regulació de la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural des d'una perspectiva més àmplia. Des d'aquest punt de vista, es refereix a la integració de la conservació del patrimoni natural en les polítiques públiques (agricultura i ramaderia, pesca marítima i gestió del litoral, forestals, hidrològiques, mineres i energètiques...); a la permeabilitat i connectivitat ecològica del conjunt del territori que han de garantir les polítiques públiques, i incorpora com a nou instrument el Pla de Connectivitat Ecològica de Catalunya; a la responsabilitat exterior en la conservació del patrimoni natural; i al patrimoni natural i a l'avaluació ambiental; i estableix els criteris que s'han de seguir en l'adopció de les mesures compensatòries que s'adoptin en el marc dels procediments de les avaluacions ambientals.

El títol IV recull els instruments i les mesures de caràcter específic per conservar el patrimoni natural i conté sis capítols dedicats a la conservació de les espècies i a les poblacions silvestres, a la conservació de la diversitat genètica, a la conservació dels hàbitats, a la conservació del patrimoni geològic, al sistema d'espais naturals protegits i altres espais amb finalitats de conservació del patrimoni natural. Entre els aspectes més innovadors de la llei, hem de destacar l'establiment del Sistema d'Espais Naturals Protegits, a fi de donar més coherència interna al conjunt del territori i reforçar els instruments per conservar, planificar i gestionar àrees protegides. Aquest sistema comprèn el conjunt d'espais naturals protegits, el Pla d'Espais d'Interès Natural, el pla d'acció del Sistema d'Espais Naturals Protegits, els instruments de planificació de cada espai i els òrgans de govern, de gestió, de cooperació i d'assessorament.

El títol V regula els instruments i les mesures sobre informació, coneixements tradicionals, investigació científica i avaluació en matèria de biodiversitat i patrimoni

natural, a fi de permetre l'accés universal a la informació i complir amb el deure dels poders públics de facilitar la difusió de coneixements relatius a la protecció i a la conservació del patrimoni natural.

El títol VI es dedica als instruments i a les mesures de participació social. Destaca la inclusió de la custòdia del territori com a fórmula per implicar els propietaris i els usuaris del territori en la conservació dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics.

El títol VII se centra en les competències i en l'organització administrativa, i posa especial atenció a la participació dels ens locals en la conservació del patrimoni natural. També es preveu la creació de dos òrgans: el Consell Social de la Natura, com a òrgan de l'Administració de la Generalitat, amb participació de la ciutadania i amb funcions de deliberació, de consulta i d'assessorament; i la Comissió Científica Assessora de la Natura, com a òrgan consultiu de la Generalitat, amb funcions d'assessorament científic i tècnic a l'Administració autonòmica i al Parlament.

El títol VIII regula els instruments econòmics, fiscals i financers, entre els quals cal destacar la creació del Fons de Conservació del Patrimoni Natural.

A l'últim, el títol IX regula les mesures de compliment de la llei, amb referència a les infraccions i a les sancions administratives i també a la reparació del dany causat i a la restauració. Com a novetat, es crea el Registre de persones infractores en relació amb el patrimoni natural.

B. L'avantprojecte de llei de la contaminació odorífera: un intent pioner de regulació específica de la contaminació causada per olors a través d'una norma de rang legal

El Departament de Medi Ambient i Habitatge també ha elaborat un esborrany d'avantprojecte de llei de qualitat odorífera. La contaminació causada per olors constitueix una matèria sobre la qual hi ha una inquietud important a Catalunya, i en la regulació de la qual s'hi treballa des de fa uns quants anys, tant en l'esfera local com en l'autonòmica. En efecte, en l'àmbit municipal, alguns ajuntaments catalans han estat pioners a regular la contaminació provocada per olors i han aprovat ordenances des

d'aquest punt de vista (és el cas de Lliçà de Vall —té l'ordenança de regulació de l'alliberament d'olors a l'atmosfera, de 29 de setembre de 2000— i de Banyoles —disposa de l'ordenança d'olors, de 26 de maig de 2008—). I, des del punt de vista autonòmic, tot i que encara no hi ha regulació específica, el camí per aconseguir aquest fi es va iniciar anys endarrere —entre altres factors, arran de l'aprovació de la Resolució 119/VII de la Comissió de Política Territorial del Parlament català, que instava el Govern a presentar un projecte de llei de contaminació olfactòria; i de la mateixa intervenció del Síndic de Greuges, que denunciava el buit normatiu existent en aquesta matèria—, havent-se difós el 2005 un esborrany d'avantprojecte de llei per regular la contaminació odorífera. El nou esborrany d'avantprojecte de llei de qualitat odorífera¹⁵, difós al febrer de 2010, elaborat sobre la base de l'anterior, el desplega i el millora, a fi de disposar d'un instrument d'utilitat, i incorpora alguns dels comentaris i suggeriments realitzats a l'esborrany de 2005 per part de diferents organismes, administracions i entitats tant públiques com privades.

L'avantprojecte de llei de qualitat odorífera pretén cobrir el buit normatiu existent en aquest àmbit i regular i garantir amb precisió i especificitat la qualitat odorífera, i convertir-se en la regulació de referència en aquesta matèria. Per això, en projecta la regulació tuïtiva sobre les zones sensibles a les molèsties causades per olors, inspirant-se en els principis generals de prevenció i correcció en origen, protecció, proporcionalitat, eficiència social, sostenibilitat, proporcionalitat, col·laboració i conscienciació.

L'objecte és regular les mesures necessàries per prevenir i corregir les molèsties causades per olors generades per determinades activitats i infraestructures en zones sensibles (definides com a “ámbito domiciliario de las zonas de suelo urbano destinadas a uso residencial”), amb dues finalitats concretes: aconseguir un alt nivell de protecció i un ambient de qualitat en matèria odorífera en zones sensibles, mitjançant la prevenció i la reducció en origen de les emissions de compostos susceptibles de generar olors; i garantir els drets de les persones, la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la

¹⁵ Podeu consultar el contingut d'aquest avantprojecte en l'enllaç següent: <http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/atmosfera/contaminacio_odorifera/avantprojecte.pdf>.

personalitat, la qualitat de vida i el benestar i un medi ambient adequat en el marc del desenvolupament sostenible.

A aquests efectes, s'estructura en sis capítols, integrats per trenta articles, dos disposicions transitòries, quatre disposicions finals i dos annexos. En el capítol 1, dedicat a les disposicions generals, s'estableixen l'objecte, les finalitats, l'àmbit d'aplicació i els principis generals de la llei. Quant al seu àmbit d'aplicació, s'estén a les activitats i a les infraestructures amb potencial incidència olfactiva en zones sensibles relacionades en l'annex 1, i s'exclouen les molèsties causades per olors generades per activitats domèstiques o veïnals.

El capítol 2, dedicat a les competències generals, determina les competències en aquest àmbit del Departament de la Generalitat en matèria de medi ambient, dels ajuntaments i de l'administració titular de la infraestructura.

El capítol 3 recull els drets i els deures —generals i específics— de totes les persones en aquesta matèria, la difusió d'informació en aquest àmbit i la seva projecció sobre l'elaboració o, si escau, l'avaluació ambiental de plans i programes que incideixin en l'implantació o explotació d'activitats i infraestructures.

El capítol 4, dedicat a la intervenció administrativa, regula la incidència d'aquesta matèria en la tramitació dels permisos ambientals requerits per a les activitats i en els procediments d'aprovació dels projectes d'infraestructures. També regula el règim de suspensió del deure de garantir un ambient de qualitat odorífera per raons tècniques, en cas que les millors tècniques disponibles no permetin evitar les molèsties causades per olors.

A l'últim, els capítols 5 i 6 regulen, respectivament, la inspecció, els requeriments i les multes coercitives, i el règim sancionador.

La llei també inclou dos annexos: l'annex 1 determina les activitats incloses en el seu àmbit d'aplicació; i el 2, els valors límit d'immisió d'olor per a determinades activitats i la metodologia que s'ha de seguir per determinar aquests valors.

2.3. La normativa ambiental: aspectes més destacables

A. L'entrada en vigor de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Sens dubte, un dels aspectes més destacables de la normativa ambiental catalana durant el període que hem analitzat és l'entrada en vigor el passat 11 d'agost de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Aquesta llei, com ja es va posar de manifest en la crònica corresponent al número 1 d'aquesta revista, deroga l'anterior Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, vigent durant més de deu anys a Catalunya, i introduceix un nou règim d'intervenció administrativa sobre les activitats limitat únicament als aspectes ambientals. Malgrat haver estat aprovada al desembre de 2009, la seva entrada en vigor quedava posposada a l'11 d'agost de 2010, probablement amb la intenció de tenir temps suficient durant aquests mesos per aprovar-ne el reglament de desplegament, necessari perquè s'apliqués de manera efectiva. No obstant això, en el moment d'entrada en vigor d'aquesta llei, encara no se n'ha aprovat el desplegament reglamentari, objecte de tramitació actualment. L'opció que finalment s'ha escollit ha estat la d'elaborar dos reglaments per desplegar la llei: un en relació amb les llicències i comunicacions; i un altre en relació amb l'autorització ambiental i l'autorització substantiva amb avaluació d'impacte ambiental que, a més a més, també regularia les entitats col·laboradores de l'administració ambiental. Com avançàvem, actualment aquests reglaments estan tramitant-se i ja han estat objecte d'informació pública¹⁶, els quals estan pendents a hores d'ara de l'emissió del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. Atesa l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 i, vistos els importants canvis introduïts en el règim d'intervenció administrativa sobre les activitats, mentre s'aproven els reglaments de desplegament, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha elaborat una sèrie de criteris que cal aplicar, que ha difós a través del seu web¹⁷. No obstant això, cal que aquests reglaments s'aprovin al més aviat possible a fi de garantir l'aplicació efectiva de la llei i més seguretat jurídica.

¹⁶ Vid. el DOGC núm. 5654, de 21 de juny de 2010.

¹⁷ Podeu consultar aquests criteris en l'enllaç següent: <<http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Empresa%20i%20avaluacio%20ambiental/Prevencio%20i%20control%20dactivitats/La%20Llei%20de%20prev%20i%20control%20amb%20dact/Legislacio%20i%20criteris%20interpretatius/documentos/criteris.pdf>>.

B. La problemàtica entorn de les corregudes de toros i de les festes tradicionals amb toros

Durant aquests últims mesos, a Catalunya s'ha produït un debat interessant entorn de les corregudes de toros i de les festes tradicionals amb toros (correbous), que ha cristal·litzat en l'aprovació de dues normes amb rang de llei. D'una banda, s'ha aprovat la Llei 28/2010, de 3 d'agost, de modificació de l'article 6 del text refós de la llei de protecció d'animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008. Aquesta llei, que entra en vigor l'1 de gener de 2012, introduceix a Catalunya la prohibició de realitzar corregudes de toros i espectacles amb toros que incloguin la mort de l'animal i l'aplicació de les sorts de la pica, les banderilles i l'estoc, i també de qualsevol modalitat d'espectacle taurí que tingui lloc dins o fora de les places de toros, excepte les festes amb toros sense mort de l'animal (correbous) en les dates i les localitats on tradicionalment se celebren. En aquests casos, també es causa dany als animals. D'aquesta manera, Catalunya s'uneix a altres comunitats autònomes, com Canàries, que també han optat per prohibir les corregudes de toros.

D'altra banda, dos mesos després que el Parlament català prohibís les corregudes de toros, s'ha aprovat la Llei 34/2010, d'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb toros, que blinda els correbous, festes tradicionals de molts municipis del sud de Tarragona, i els deslliga de la prohibició de les corregudes de toros. Aquesta llei — aprovada a partir d'una proposició de llei impulsada per CIU — estableix els requisits i les condicions que han de complir les festes tradicionals amb toros sense mort de l'animal (correbous), en les dates i les localitats catalanes on tradicionalment se celebren, amb la finalitat de garantir els drets, els interessos i la seguretat dels participants i del públic i, al mateix temps, la protecció dels animals. La llei sotmet la celebració de qualsevol festa tradicional amb toros a autorització prèvia de la delegació territorial del Govern corresponent i regula els requisits d'aquesta autorització, així com les condicions de seguretat que han de complir els recintes per celebrar aquestes festes; les funcions dels organitzadors i dels controladors de l'espectacle; les diferents modalitats de les festes tradicionals amb toros, i les prohibicions que han de respectar-se. També inclou un règim sancionador, i atribueix la competència sancionadora en

aquest àmbit als òrgans centrals i als serveis territorials del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives. Mitjançant aquesta norma, el codi de bones pràctiques aprovat fa uns quants anys entre l'Administració i els actors implicats passa a tenir rang de llei.

C. La normativa en matèria d'espais naturals protegits

Durant aquest període han vist la llum diverses normes relatives a espais naturals protegits. En primer lloc, s'han produït noves declaracions d'espais naturals de protecció especial. D'una banda, mitjançant la Llei 15/2010, de 28 de maig, s'han declarat el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i, dins l'àmbit del Parc Natural, la reserva natural parcial marina de les Medes, la reserva natural parcial dels aiguamolls del Baix Ter i la reserva natural integral de les Illes Medes¹⁸. Aquesta llei estableix el marc jurídic i crea mecanismes de planificació, gestió i protecció de la legalitat per conservar i, si escau, restaurar els sistemes naturals terrestres i marins dels espais de protecció especial que es declaren, i per promoure els valors geològics, botànics, faunístics, ecològics, paisatgístics, culturals, educatius, científics, productius i socials que contenen. També delimita definitivament l'espai del Pla d'Espais d'Interès Natural, als efectes del que preveu l'article 16.2 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals de Catalunya. La Llei 15/2010 també habilita el Govern perquè, mitjançant un decret, pugui ampliar l'àmbit establert del parc natural i de les reserves naturals parcials i també millorar-ne els límits; actualitzar les quantitats de les sancions i les multes coercitives fixades per aquesta llei, tenint en compte les variacions de l'índex de preus al consum, i dictar les normes necessàries per desplegar i aplicar aquesta llei. Així mateix, el departament competent en matèria de medi ambient, en el termini de dos anys a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha d'elaborar i presentar el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural del Montgrí, les

¹⁸ Aquesta llei deroga la Llei 19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les Illes Medes, sense perjudici del que estableixen la disposició transitòria quarta; el Decret 253/2000, de 24 de juliol, de creació del Patronat per al Desenvolupament Sostenible dels Espais d'Interès Natural del Massís del Montgrí i l'Arxipèlag de les Medes, i l'article 3 del Decret 222/2008, de 11 de novembre, pel qual s'aprova el Pla Rector d'ús i Gestió de l'Àrea Protegida de les Illes Medes, que fa referència a la creació del Consell Assessor de l'Àrea Protegida de les Illes Medes. També deixa sense efecte la Resolució de 14 de febrer de 2000, per la qual es fa públic l'Acord de Govern, de 10 de gener de 2000, mitjançant el qual s'aprova definitivament el Pla Especial de delimitació definitiva de l'espai del Pla d'Espais d'Interès Natural del Montgrí.

Illes Medes i el Baix Ter, perquè s'aprovi seguint la tramitació establerta per als plans especials dels espais naturals protegits. En el termini màxim d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquest pla especial, i d'acord amb les disposicions que estableix aquest pla, ha d'elaborar-se i presentar-se el Pla Rector d'ús i Gestió d'aquest espai natural.

D'altra banda, el Decret 146/2010, de 19 d'octubre, ha declarat la serra de Collserola com a espai natural de protecció especial mitjançant la declaració com a parc natural, amb dues reserves naturals parcials (la Font Grogà i la Rierada-Can Balasc), a fi de conservar el patrimoni natural i cultural de forma compatible amb l'aprofitament ordenat dels recursos i l'activitat dels seus habitants, en el marc de la regulació que estableix la Llei catalana 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, i la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. Aquest decret fixa els objectius d'aquest parc i de les dues reserves naturals parcials; i estableix algunes previsions sobre el règim urbanístic i les normes bàsiques de protecció del parc, l'ordenació i la planificació d'aquest espai, i el Pla Especial per a la Protecció del Medi Natural i del Paisatge que ha d'ordenar aquest espai. També preveu l'existència, en aquest parc, d'unes àrees anomenades espais de regulació especial (ERE), i definides com a sectors més vinculats a la trama urbana, ja sigui per la presència d'edificacions, ja sigui per les seves característiques d'àmbits d'enllaç entre els sistemes naturals i els espais verds de la ciutat. L'objectiu de la previsió d'aquests espais de regulació especial és permetre establir una regulació urbanística que garanteixi la relació harmònica entre la ciutat i el parc; ordenar l'ús públic i dignificar el caràcter dels espais periurbans i permetre dur a terme actuacions d'interès públic, social o comunitari, sempre de manera coherent amb la condició d'espai natural de protecció especial. A l'últim, aquest decret també regula alguns aspectes relacionats amb l'organització i la gestió del parc i el seu règim de finançament. Amb relació al Parc Natural de Collserola, mitjançant l'Acord del Govern GOV/189/2010, de 19 d'octubre¹⁹, s'ha aprovat integrar l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el Consorci d'aquest parc —constituït per la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments del Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern,

¹⁹ DOGC núm. 5745, de 29 d'octubre de 2010.

Esplugues de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixach, Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès—, així com els nous estatuts d'aquest consorci; i l'aportació econòmica del Departament de Medi Ambient i Habitatge a aquest consorci de 717.960 €.

En segon lloc, durant aquest període, el Govern de la Generalitat també ha aprovat definitivament el Pla Especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa, mitjançant l'Acord del Govern GOV/161/2010, de 14 de setembre²⁰; i el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida i el Pla de Gestió d'aquests espais, mitjançant l'acord del Govern GOV/185/2010, d'11 d'octubre²¹. El nou Pla Especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa substitueix l'anterior —aprovat pel Decret 82/1994, de 22 de febrer, i modificat pel Decret 160/1997, de 25 de juny—, i constitueix l'instrument bàsic d'ordenació d'aquest parc natural, d'acord amb la Llei 12/1985, d'espais naturals protegits. El seu objectiu és adaptar el Pla Especial d'aquest espai natural a les noves necessitats mitjançant la revisió, que està justificada per diferents factors: les modificacions significatives de l'àmbit del parc natural, amb la incorporació de noves zones on estendre l'ordenació; més coneixement del territori i més experiència de gestió, així com l'existència de mitjans tècnics més evolucionats; l'aparició de nous reptes territorials, requeriments socials i realitats que el parc ha d'assumir, i els canvis produïts tant en l'àmbit legislatiu general com, en particular, en l'àmbit del planejament urbanístic i territorial, junt amb els nous requeriments derivats de la integració del parc en la Xarxa Natura 2000. Quant al Pla Especial de Protecció i el Pla de Gestió dels espais naturals protegits de la Plana de Lleida, es tracta de plans que s'apliquen a diversos espais de la Xarxa Natura 2000 (Secans del Segrià i Utxesa, Secans de Mas de Melons-Alfés, Secans de Belianes-Preixana, Anglesola-Vilagrassa, Plans de Sió, Granyena, Bellmunt-Almenara, Secans de la Noguera i Plans de la Unilla), i que, amb la regulació dels usos i de les activitats en aquests espais i la determinació de la gestió que cal aplicar, pretenen conservar el patrimoni natural que engloben i ordenar les activitats socioeconòmiques per fer-les compatibles amb la conservació dels seus valors. D'aquesta manera, a més a més, es

²⁰ DOGC núm. 5735, de 15 d'octubre de 2010.

²¹ DOGC núm. 5755, de 15 de novembre de 2010. Aquest acord deroga el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l'Espai Natural Protegit d'Alfés, aprovat mitjançant l'Acord del Govern de 9 de juny de 1998.

compleix amb les necessàries mesures de planificació d'aquests espais en aplicació del dret comunitari —es tracta d'espais inclosos en la tercera llista actualitzada de llocs d'importància comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània, recollida en la Decisió 2010/45/EU, de 22 de desembre de 2009.

Finalment, el Decret 166/2010, de 9 de novembre, modifica el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, en relació amb l'espai del Moianès. Concretament, se n'han modificat la denominació, que passa a ser espai del Moianès i la Riera de Muntanyola, i els límits i les determinacions de l'espai que contenen els documents del Pla.

D. Algunes novetats pel que fa a la legislació de residus

En matèria de residus s'han aprovat tres decrets d'interès que, a més a més d'aprovar diferents programes de gestió de residus (PROGREMIC, PROGRIC i PROGROC), introduceixen algunes novetats normatives d'interès. Es tracta del Decret 87/2010, el Decret 88/2010 i el Decret 89/2010, tots del 29 de juny. El Decret 87/2010, a més d'aprovar el PROGREMIC, regula succinctament el procediment per aprovar el Pla de Desplegament de la Recollida Selectiva de la Fracció Orgànica previst en el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol; i la distribució de la recaptació dels cànons que enregistren la disposició de la deixalla dels residus municipals. El Decret 88/2010²², que aprova el PROGRIC, també modifica determinats preceptes del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de la gestió de residus. Concretament, modifica l'apartat 2 de l'article 6, l'article 7, l'apartat 2 de l'article 28 i l'article 31; i introduceix l'article 31 bis. I el Decret 89/2010, a més d'aprovar el PROGROC, regula el règim de la producció i de la gestió de residus de la construcció i de la demolició en l'àmbit territorial de Catalunya, i desplega la normativa bàsica estatal que conté el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer; i desplega la regulació del cànon sobre disposició controlada dels residus de la construcció que efectua la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició de deixalla dels residus.

²² Aquest decret deroga el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de les runes i altres residus de la construcció i el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació de l'anterior.

E. Altres normes d'interès

Durant el període objecte d'anàlisi també s'han aprovat altres normes d'interès. En primer lloc, destaquem, el Decret català 68/2010, de 25 de maig, sobre tramitació i aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l'edificació i del Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació²³. Aquest Decret, adoptat d'acord amb les competències que l'Estatut d'autonomia atorga a la Generalitat en l'article 137, té com a objecte establir el procediment de tramitació i d'aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l'edificació, a fi d'adecuar aquest codi a les concretes exigències del territori i de la població de Catalunya. El compliment d'aquesta finalitat es realitza a través de la Subcomissió sobre l'Aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació a Catalunya, que s'adscriu al Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l'Habitatge, a qui correspon emetre els informes tècnics sobre les sol·licituds de reconeixement dels documents presentats, perquè l'òrgan competent en matèria de qualitat de l'edificació aprovi els documents reconeguts. També crea el Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació de Catalunya, adscrit a l'òrgan competent en matèria de qualitat de l'edificació, que té caràcter de registre públic estrictament als efectes d'informació i de publicitat per als agents, als organismes i a les entitats que exerceixin funcions relacionades amb l'aplicació del Codi tècnic de l'edificació. S'hi han d'inscriure els documents reconeguts aprovats per l'òrgan competent en matèria de qualitat de l'edificació.

En segon lloc, el Decret 104/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual s'aprova el desplegament territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua²⁴. Aquest decret completa el procés de modificació de l'estructura territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua iniciat amb els decrets 175/2001, de 26 de juny, mitjançant el qual s'aprova el desplegament

²³ Aquest decret modifica, en la disposició addicional primera, els articles 2 i 3 i afegeix un nou article, el 13, al Decret 41/2010, de 23 de març, pel qual es crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l'Habitatge, i, en la disposició addicional segona, modifica la disposició final 1.2 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al Dret a l'Habitatge 2009-2012.

²⁴ Aquest decret deroga el Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual s'aprova el desplegament territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua i la disposició final del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels estatuts de la Agència Catalana de l'Aigua i de modificació del Decret 175/2001, que aprova el desplegament territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua. Així mateix, modifica la denominació del Decret 86/2009, de 2 de juny, que passa a anomenar-se Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua.

territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua, i 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua i de modificació del Decret 175/2001, amb l'objecte d'aconseguir una gestió més eficaç i pròxima a la ciutadania i afavorir la seva participació. Amb aquest fi, estableix que l'Agència Catalana de l'Aigua exerceix les seves funcions i potestats i presta els serveis de la seva competència de manera desconcentrada al territori mitjançant sis demarcacions territorials (Girona, Tordera-Besòs, Llobregat-Foix, Tarragona, Lleida i Terres de l'Ebre). Al capdavant de cadascuna d'aquestes demarcacions territorials hi ha un cap de demarcació, designat pel director de l'Agència i sota la dependència jeràrquica i funcional del gerent de l'Agència. Els serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge exerceixen d'òrgan de coordinació entre el Departament i les demarcacions territorials de l'Agència Catalana de l'Aigua.

En tercer lloc, mitjançant el Decret 114/2010, de 31 d'agost, es crea l'Observatori de l'Alimentació i l'Agricultura Ecològiques de Catalunya, que s'adscriu a la direcció general competent en l'àmbit de planificació i relacions agràries. La finalitat de l'Observatori és conèixer i analitzar la realitat del sector i les principals magnituds que l'afecten, fonamentalment des del punt de vista econòmic i estructural. Es tracta d'un òrgan tècnic, consultiu i assessor del departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia i alimentació les funcions del qual són estrictament tècniques en els àmbits de la informació, l'estudi, la consulta i l'assessorament en matèria d'alimentació i d'agricultura ecològiques.

En quart lloc, en relació amb el Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), s'ha aprovat el Decret 124/2010, de 7 de setembre, que modifica el Decret 300/1987, de 4 d'agost, de constitució d'aquest consorci, a fi de fer-ne més operatiu el funcionament i adaptar-lo a les noves necessitats. Mitjançant l'Acord del Govern GOV/155/2010, de 7 de setembre, s'han aprovat els estatuts d'aquest consorci. Aquest consorci, creat, sense ànim de lucre, amb la finalitat de promoure la investigació, els estudis i l'ensenyament en el camp de l'ecologia i de les aplicacions forestals, està integrat per la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Consell Superior d'Investigacions

Científiques (CSIC). La Generalitat participa en aquest consorci per mitjà dels departaments competents en els àmbits de medi ambient, política territorial, agricultura i acció rural, investigació i innovació, i prevenció, extinció d'incendis i salvament.

Per acabar, mitjançant l'Ordre MAH/469/2010, de 22 de setembre, s'han modificat les bases reguladores de subvencions del Departament de Medi Ambient i Habitatge per adequar-les a les noves exigències del capítol IX del text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei 5/2008, de 24 d'abril, i la Llei 26/2009, de 23 de desembre. Concretament, es refan els apartats de diverses ordres corresponents als requisits dels destinataris de les subvencions, a la documentació que cal aportar amb la sol·licitud de subvenció i a les obligacions dels beneficiaris²⁵.

²⁵ Es modifiquen les bases de les subvencions regulades en les ordres següents del Departament de Medi Ambient i Habitatge: MAH/444/2009, de 7 d'octubre; MAH/244/2008, de 15 de maig; MAH/122/2005, de 29 de març; MAH/424/2008, de 22 de setembre; MAH/189/2009, de 7 d'abril; MAH/159/2006, de 29 de març; MAH/230/2009, de 5 de maig; MAH/386/2005, de 13 de setembre; MAH/202/2007, de 8 de juny; MAH/203/2007, de 8 de juny; MAH/137/2007, de 26 d'abril; MAH/458/2008, de 16 d'octubre; MAH/174/2009, d'1 d'abril; MAH/262/2010, de 22 d'abril; MAH/279/2007, de 24 de juliol; MAH/111/2008, de 12 de març; MAH/214/2009, de 24 d'abril; MAH/214/2010, de 29 de març; MAH/177/2010, de 22 de març, i MAH/215/2010, d'1 d'abril.